



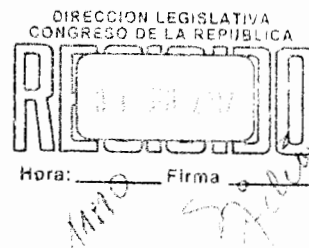
*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales*

*Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

•000022

Guatemala 31 de julio de 2012

Licenciada
Ana Isabel Antillón
Dirección Legislativa
Congreso de la República
Su Despacho



Apreciable Señora Directora:

De manera atenta me dirijo a usted y de conformidad con lo regulado en los artículos 39, 40 y 41 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, adjunto el **DICTAMEN**, emitido en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, el día dieciséis de julio del año dos mil doce, a la **Iniciativa de Ley número 4387**, que dispone aprobar **REFORMAS A LA CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA**.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterar a la Señora Directora las muestras de mi alta estima.

Diputado Oliverio García Rodas
Presidente
Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales



COMISION DE LEGISLACION
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
Congreso de la República de Guatemala, C. A.

cc. crch.



000023

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

DICTAMEN No. 03-2010.

INICIATIVA 4387

**INICIATIVA QUE DISPONEN APROBAR REFORMAS A LA CONSTITUCION
POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA.**

HONORABLE PLENO:

ANTECEDENTES

Con fechas 23 de agosto de 2011, el Pleno del Congreso de la República conoció la iniciativa 4387 que disponen aprobar Reformas a la Constitución Política de Guatemala, la que fue trasladada a esta Comisión para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa numero 4387 fue presentada de acuerdo al artículo 277 de la Constitución Política por un número de diez diputados del Congreso de la Republica, siendo ellos JOSE ROBERTO ALEJOS CAMBARA, JAIME ANTONIO MARTINEZ LOHAYZA, JOSE ALEJANDRO AREVALO ALBUREZ, CARLOS RAFAEL FION MORALES, JOSE ALBERTO GANDARA TORREBIARTE, FELIX OVIDIO MONZON PEDROZA, FRANCISCO JOSE CONTRESTAS CONTRERAS, NINETH VARENCA MONTENEGRO COTTOM, CARLOS VALENTIN GRAMAJO MALDONADO Y BAUDILIO ELINOHET HICHOS LOPEZ.



000024

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

La iniciativa pretende la modificación de los artículos constitucionales 205, Garantías del Organismo Judicial, Período de funciones de Magistrados y Jueces, 209, Nombramiento de Jueces y personal auxiliar, 214 Integración de la Corte Suprema de Justicia, 215 Elección de la Corte Suprema de Justicia, 217 Magistrados, 222 Magistrados Suplentes, Adición de un artículo 222 "A", Asistencia Legal Gratuita, Adición de un artículo 250 "A" Policía Nacional Civil, y 25, Ministerio Público. Adicionando dos artículos transitorios.

**CONSIDERACIONES DE LA COMISION EN CUANTO A LA REFORMA
CONSTITUCIONAL.**

Los miembros de la comisión al efectuar el análisis de las propuestas de reforma constitucional que se proponen, han tomado en consideración elementos doctrinarios contemporáneos, jurisprudencia de países con similares características jurídicas que el nuestro y disposiciones o resoluciones de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.

Al efecto cabe hacer entonces las siguientes observaciones:

1. Las facultades y limites del poder constituyente derivado o poder constituyente constituido.

1. El poder constituyente original, en nuestro caso la Asamblea Nacional Constituyente, electa específicamente para elaborar el texto constitucional, fue electo por la población guatemalteca en un proceso que llevo a un 80% aproximadamente, de los votantes inscritos a designar a los diputados encargados de esa tarea.

2. La legitimidad del poder constituyente original queda plasmada por medio de un proceso democrático, libre y transparente, por el gran



000025

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

porcentaje de participación electoral y por la misma forma en que la población emite su voto, llevando a representantes de diferentes y a veces antagónicas ideologías al seno de la Asamblea.

3. El producto luego de meses de discusiones y decisiones es una Constitución que se concibe como un gran pacto social en el que las fuerzas políticas logran grandes acuerdos que permitan al país encaminarse a la creación y consolidación de un Estado de Derecho y un régimen de absoluto respeto a los Derechos Humanos.

4. Posibilita la Constitución aprobada la inclusión y participación de sectores que por diversas razones estaban excluidos de la vida política del país, tanto así que como producto de ese espíritu democrático y participativo del texto aprobado, al amparo del mismo se produce en nuestro país un evento de singular naturaleza como lo es la firma de acuerdos de paz que ponen fin a largos años de enfrentamiento armado.

5. El texto aprobado por el poder constituyente avanza considerablemente en la concepción de los derechos del hombre como sujeto y fin del orden social, estableciendo la regla fundamental de que el Estado se organiza para proteger a la persona y sus derechos.

6. El preámbulo de la Constitución que enuncia con meridiana claridad el espíritu que informa el texto, reconoce la existencia de los derechos humanos individuales pero también la presencia de los derechos sociales e incluso de los de tercera generación que crean el entorno para el desarrollo integral de la persona.

7. Ese poder constituyente crea entonces un texto fundamental que establece esos principios básicos y organiza al Estado de manera tal, que esa conformación permita el cumplimiento de los fines



000026

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

propuestos, estableciendo los presupuestos, organización, organismos, instituciones y reglas necesarias y fundamentales.

8. Esas características fijadas en nuestra Constitución, por ese poder constituyente originario, limitan por sí, entonces las facultades del otro poder constituyente, es decir el poder Constituyente Constituido o derivado, el que si bien tiene facultades de reforma, son limitadas, es decir, debe respetar los aspectos fundamentales, tanto así, que el texto fundamental establece reglas y procedimientos para poder ejercitar esa facultad de reforma.

La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales consciente de las diferencias y limitaciones que rigen la actuación de un poder constituyente constituido llevó a cabo el análisis de las propuestas de reformas a la carta magna.

Vale en esta parte de nuestro informe citar el mandato del propio texto para reafirmar los límites del poder constituyente constituido.

- La reforma del artículo 278 y de cualquiera de los artículos contenidos en el capítulo I del Título II, están fuera de la facultad de reforma del Congreso de la República como poder constituyente constituido, puesto que esa facultad está limitada a una Asamblea Nacional Constituyente, observando el procedimiento que ese artículo citado establece.
- Para cualquier otra reforma constitucional se hace necesario que el Congreso de la República la apruebe con el voto afirmativo de las dos terceras partes del total de diputados, reformas que entraran en vigencia solo y solo si las mismas son ratificadas mediante consulta popular reglada por el artículo 173 constitucional.



000027

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

- La parte pétrea o no reformable está contenida en el artículo 281 del texto constitucional y explícitamente determina que los artículos 140, 141, 165 inciso g), 186 y 187, ni en forma alguna toda cuestión que se refiera a la forma republicana de gobierno, al principio de no reelección para el ejercicio de la Presidencia de la República, ni restarle efectividad o vigencia a los artículos que estatuyen la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República, así como tampoco dejárseles en suspenso o de cualquier otra manera variar o modificar su contenido.

2. La facultad y límites de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

La comisión para cumplir con el mandato del pleno al trasladarnos las iniciativas de reforma constitucional, entiende que el análisis, estudio y opiniones de la comisión, están limitadas en varios aspectos, así:

- La comisión no puede ni aprobar o desechar las propuestas de reforma constitucional, pues ello es función del pleno del Congreso de la República, Órgano Constituyente Constituido, al tenor del artículo 280 de la Constitución que determina que es una mayoría calificada la que es necesaria para aprobar esa iniciativa.
- Para proceder a la reforma se hace necesario cumplir estrictamente con lo normado por el texto constitucional, a saber:
 - Que la propuesta de reforma no se refiera a lo dispuesto en el artículo 278.
 - Que la iniciativa de reforma este hecha por diez o más diputados.
 - Que la misma se refiera a los artículos que es posible reformar por el Congreso de la República.



000028

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

- Que no esté considerado en la propuesta el reformar los artículos que están excluidos por el artículo 281, ni de cualquier otra manera variar o modificar su contenido.
- Que la comisión no tiene facultades para modificar el texto de las propuestas, sino únicamente estudiarlas y analizarlas, y con sus conclusiones ilustrar al pleno del Congreso para un mejor conocimiento.

3. Del método, estudio y actividades de la Comisión.

Los integrantes de la Comisión, dispusieron para cumplir con el mandato del Pleno del Congreso, realizar el estudio, análisis y consultas sobre las propuestas de reforma Constitucional, las siguientes actividades:

- El estudio y análisis personal por cada uno de los integrantes de la Comisión, tanto la Comisión actual, como la de la anterior legislatura.
- El estudio y análisis de los diputados con sus respectivos bloques y en su caso con los partidos políticos a que pertenecen.
- La consulta con la doctrina Constitucional que informa sobre los sistemas de reforma Constitucional.
- El análisis de las facultades de la Comisión y del Pleno del Congreso, al tenor de los artículos 277 a 281 de la Carta Magna, que forman parte del Título VII Reformas a la Constitución, Capítulo Único Reformas a la Constitución.
- El determinar los aspectos formales de las iniciativas de reforma constitucional.
- El análisis exhaustivo del artículo 281 de la Constitución para no reformar ni directa ni cualquier otra forma los llamados artículos pétreos de nuestro texto.
- Realizar al tenor de lo dispuesto en el artículo 36, párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, audiencias públicas para conocer en



000029

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

pensamiento, opiniones y voluntad de los diferentes sectores que conforman la sociedad guatemalteca.

- Trasladar al pleno del Congreso de manera ordenada, en formato que permita conocer los argumentos, documentos y opiniones de los ciudadanos que acudieron a las audiencias señaladas por la Comisión.
- Elaborar un informe con las conclusiones de los miembros de la Comisión, dejando claro y a salvo que el Pleno del Congreso de la República, quien mediante una mayoría calificada, como Órgano Constituyente Constituido quién tiene la facultad y capacidad desaprobar o no las propuestas de reforma Constitucional.

4. De las audiencias públicas realizadas por la Comisión.

La Comisión pudo observar que las exposiciones pueden clasificarse en cuatro posiciones diferentes:

- Los que se manifestaron a favor de una u otra propuesta de reforma a la Constitución.
- Los que se manifestaron en contra de las propuestas de reforma Constitucional.
- Un tercer grupo que no está de acuerdo con que al texto Constitucional se le hagan reformas, por considerar que no es el momento político ni social para hacerlo y que debe de terminarse de desarrollar nuestra carta magna, y
- Los que creen que para reformar la Constitución, sería mejor la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

Por otra parte, de las audiencias y documentos que se llevaron a cabo y se presentaron, se puede concluir que la mayoría de las personas e instituciones que



000030

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

acudieron a las audiencias, está de acuerdo que es urgente realizar reformas al sistema de justicia, para garantizar a los ciudadanos y personas en general el objetivo de una justicia pronta y cumplida.

5. Del movimiento y propuestas para reformar la Constitución.

La Comisión considera importante resaltar en su estudio y análisis de las propuestas de reforma Constitucional,

- La iniciativa formulada por los señores diputados tiene como origen una propuesta elaborada por la Universidad de San Carlos de Guatemala, Universidad Rafael Landívar y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, propuesta que es producto de numerosos análisis, conversatorios, foros y estudios hechos tanto por esas instituciones, como por los diputados al Congreso de la República.
- Que al abrirse la convocatoria a las audiencias públicas la misma fue atendida de inmediato por múltiples sectores de la sociedad guatemalteca, tanto de la ciudad capital, como del interior del país.
- Que cada uno de los sectores y personas que solicitaron audiencia, acudieron de manera puntual y responsable a la misma.
- Que las exposiciones se hayan efectuado en un ambiente de absoluto respeto tanto a la importancia del evento, como al pensamiento de los otros grupos o personas.
- Que el número de expositores en las audiencias haya sido numeroso y conformado por mujeres y hombres, de distintos pensamientos, edades y condiciones económicas y sociales.



000031

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

- Que muchas instituciones como universidades, centros de estudio, académicos y gremiales hayan acudido a expresar su opinión.
- Que los integrantes de la Comisión no obstante la gran cantidad de audiencias hayan acudido a título personal y en representación de sus bancadas, grupos o partidos a la mayoría.
- Que por medio de las audiencias públicas, las que por cierto reafirman la participación ciudadana, la Comisión pudo comprobar el alto interés por participar en las cuestiones de gobierno y Estado por parte de los ciudadanos.
- Que por medio de las audiencias públicas se demostró que lo relacionado con la cosa pública, no es solo interés de los políticos y de los partidos, sino existe una genuina voluntad de la población en general de hacer escuchar sus opiniones y propuestas.

**ANALISIS DE LA COMISION CON RESPECTO A LAS PROPUESTAS DE
REFORMA CONSTITUCIONAL Y LOS LIMITES FIJADOS POR LA PROPIA
CONSTITUCION AL PLENO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA COMO
PODER CONSTITUYENTE CONSTITUIDO.**

INICIATIVA 4387.

El texto de la iniciativa se transcribe a continuación, con un texto paralelo de lo normado por la Constitución Política de la República de Guatemala:



000032

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

**TÍTULO IV
PODER PÚBLICO**

**CAPÍTULO IV
Organismo Judicial**

**SECCIÓN PRIMERA
Disposiciones Generales.**

CONSTITUCION ACTUAL**INICIATIVA 4387**

**CAPÍTULO IV
ORGANISMO JUDICIAL**

**SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES**

CONSTITUCION ACTUAL**INICIATIVA 4387**

ARTICULO 205. Garantías del Organismo Judicial.

ARTICULO 205. Garantías del Organismo Judicial

Se instituyen como garantías del Organismo Judicial, las siguientes:

- a) La independencia funcional;
- b) La independencia económica;
- c) La no remoción de los magistrados y jueces de primera instancia, salvo los casos establecidos por la Ley; y
- d) La selección del personal.

Se instituyen como garantías del Organismo Judicial, las siguientes:

- a) La independencia funcional;
- b) La independencia económica;
- c) La carrera judicial; y
- d) La selección del personal.



000033

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

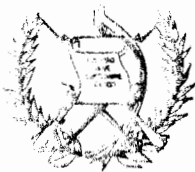
ARTICULO 208. Período de funciones de magistrados y jueces.	ARTICULO 208. Carrera Judicial
<p>Los magistrados cualquiera que sea su categoría, y los jueces de primera instancia, durarán en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelectos los primeros y nombrados nuevamente los segundos. Durante ese período no podrán ser removidos ni suspendidos, sino en los casos y con las formalidades que disponga la Ley.</p>	<p>ARTÍCULO 208. Carrera Judicial. La ley que regule la carrera judicial garantizará la estabilidad, idoneidad e independencia de los jueces y magistrados y establecerá lo relativo a:</p> <ul style="list-style-type: none">a) El proceso de ingreso a la Carrera Judicial y de nombramientos, promociones y ascensos, con base en concursos de oposición públicos que busquen la excelencia profesional;b) Los derechos, obligaciones y responsabilidades de los integrantes de la carrera judicial, la dignidad de su función y su adecuada remuneración;c) La formación profesional de los integrantes de la carrera profesional y el perfeccionamiento de su función;d) Las causas para traslados, retiro obligatorio y sistema de pensiones; ye) Los procedimientos disciplinarios contra jueces y magistrados, incluyendo causales de destitución, con garantías, faltas y sanciones preestablecidas. <p>La carrera judicial abarca desde la judicatura de paz hasta la magistratura de la Corte de Apelaciones.</p>



000034

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

	Los magistrados de la Corte de Apelaciones, los jueces de primera instancia y los jueces de paz, durarán en sus funciones diez años, pudiendo renovárseles el período de acuerdo a la evaluación de su desempeño, conforme lo determine el Consejo de la Carrera Judicial.
ARTICULO 209. Nombramiento de jueces y personal auxiliar.	ARTICULO 209. Consejo de la Carrera Judicial.
Los jueces, secretarios y personal auxiliar serán nombrados por la Corte Suprema de Justicia. Se establece la carrera judicial. Los ingresos, promociones y ascensos se harán mediante oposición. Una ley regulará esta materia.	ARTÍCULO 209. Consejo de la Carrera Judicial. Los procesos de ingreso, nombramientos, promociones y ascensos, de formación profesional y perfeccionamiento de la función y de traslados, retiro obligatorio y jubilaciones, serán competencia de un Consejo de la Carrera Judicial cuya conformación deberá observar los principios de estabilidad y representación de jueces de paz, jueces de primera instancia, magistrados de la Corte de Apelaciones, universidades del país y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Una ley regulará esta materia.



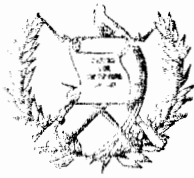
000035

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

SECCIÓN SEGUNDA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

<i>CONSTITUCION ACTUAL</i>	<i>INICIATIVA 4387</i>
ARTICULO 214. Integración de la Corte Suprema de Justicia.	ARTICULO 214. Integración de la Corte Suprema de Justicia.
<p>La Corte Suprema de Justicia se integra con trece magistrados, incluyendo a su Presidente, y se organizará en las cámaras que la misma determine. Cada cámara tendrá su presidente.</p> <p>El Presidente del Organismo Judicial lo es también de la Corte Suprema de Justicia cuya autoridad se extiende a los tribunales de toda la República.</p> <p>En caso de falta temporal del Presidente del Organismo Judicial o cuando conforme a la Ley no pueda actuar o conocer, en determinados casos, lo sustituirán los demás magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el orden de su designación.</p>	<p>ARTÍCULO 4. Reforma parcial del artículo 214, conforme el siguiente texto.</p> <p>ARTICULO 214. Integración de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia se integra con trece magistrados, incluyendo a su presidente, y se organizará en las cámaras que la misma determine. Cada cámara tendrá su presidente.</p> <p>El Presidente del Organismo Judicial lo es también de la Corte Suprema de Justicia cuya autoridad se extiende a los tribunales de toda la República.</p> <p>Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia elegirán entre sus miembros, con el voto favorable de las dos terceras partes, al Presidente de la misma, quien fungirá como tal por un período de cinco años, pudiendo ser reelecto.</p>



000036

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

	En caso de falta temporal del Presidente del Organismo Judicial o cuando conforme a la ley no pueda actuar o conocer, en determinados casos, lo sustituirán los demás magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el orden de su designación.
ARTICULO 215. Elección de la Corte Suprema de Justicia.	ARTICULO 215. Elección de la Corte Suprema de Justicia.
<p>Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el congreso de la República para un período de cinco años, de una nómina de veintiséis candidatos propuestos por una comisión de postulación integrada por un representante de los rectores de las universidades del país, que la preside, los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada universidad del país, un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por igual número de representantes electos por los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y demás tribunales a que se refiere el artículo 217 de esta Constitución.</p> <p>La elección de candidatos requiere del voto de por lo menos las dos terceras partes de los miembros de la comisión.</p>	<p>ARTÍCULO 215. Elección de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el Congreso de la República para un período de diez años de las nóminas de candidatos propuestas por una comisión de postulación integrada por un representante de los rectores de las universidades del país, que la preside, el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, un representante de los Decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de las Universidades del país, dos representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y dos representantes electos por los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y demás tribunales a que se refiere el artículo 217 de esta Constitución.</p>



000037

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

En las votaciones tanto para integrar la Comisión de Postulación para la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia elegirán, entre sus miembros, con el voto favorable de las dos terceras partes, al presidente de la misma, el que durará en sus funciones un año y no podrá ser reelecto durante ese período de la Corte.

La elección de candidatos requiere del voto de por lo menos cinco de los siete integrantes de la comisión.

En las votaciones tanto para integrar la Comisión de Postulación como para integrar la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación.

Cada magistrado será electo con el voto de las dos terceras partes o más del total de diputados que integran el Congreso de la República para un período de diez años, renovándose cada cinco años, seis o siete de ellos, según corresponda, pudiendo ser reelectos hasta el límite de edad de la jubilación obligatoria.

SECCIÓN TERCERA

CORTE DE APELACIONES Y OTROS TRIBUNALES

CONSTITUCION ACTUAL

ARTICULO 217. Magistrados.

Para ser magistrado de la Corte de Apelaciones, de los tribunales colegiados y de otros que se crearen con la misma categoría, se requiere, además de los requisitos señalados en el artículo 207, ser mayor de treinta y cinco años, haber sido juez de primera instancia o haber ejercido por más de

INICIATIVA 4387

ARTICULO 217. Magistrados.

ARTÍCULO 217. Magistrados de la Corte de Apelaciones. Para ser magistrado de la Corte de Apelaciones, de los tribunales colegiados y de otros que se crearen con la misma categoría, se requiere, además de los requisitos señalados en el artículo



*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

0000038

<p><u>cinco</u> años la profesión de abogado.</p> <p>Los magistrados <u>titulares a que se refiere este artículo</u> serán electos por el <u>Congreso de la República</u>, de una <u>nómina que contenga el doble del número a elegir propuesta</u> por una comisión de postulación integrada por <u>un representante de los rectores de las Universidades del país, quien la preside, los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada Universidad del país, un número equivalente de miembros electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por igual número de representantes electos por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.</u></p> <p>La elección de candidatos requiere el voto de por lo menos <u>las</u> dos terceras partes de los miembros de la Comisión.</p> <p>En las votaciones tanto para integrar la Comisión de Postulación como para la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación.</p>	<p>207, ser mayor de treinta y cinco años, haber sido juez de primera instancia o haber ejercido por más de diez años la profesión de abogado y ser nombrado por el Consejo de la Carrera Judicial, de acuerdo al procedimiento establecido.</p>
ARTICULO 222. Magistrados suplentes.	ARTICULO 222. Magistrados suplentes.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán suplidos por los magistrados de	Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán suplidos por los magistrados de los tribunales



000039

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

los tribunales a que se refiere el Artículo 217 de esta Constitución, conforme lo disponga la Ley del Organismo Judicial, siempre que reúnan los mismos requisitos de aquellos.

Los magistrados de los tribunales a que se refiere el Artículo 217 de esta Constitución tendrán como suplentes a los magistrados que con tal categoría haya electo el Congreso de la República.

Los magistrados suplentes serán electos en la misma oportunidad y forma que los titulares y de la misma nómina.

a que se refiere el artículo 217 de ésta Constitución. Conforme lo disponga la Ley del Organismo Judicial siempre que reúnan los mismos requisitos de aquellos.

Los magistrados de los tribunales a que se refiere el artículo 217 de esta Constitución tendrán como suplentes a los magistrados que con tal categoría haya nombrado el Consejo de la Carrera Judicial.

CONSTITUCION ACTUAL	INICIATIVA 4387
	ARTÍCULO NUEVO Artículo 222"A" Asistencia legal gratuita. Las leyes regularan el derecho a la asistencia legal gratuita a quienes carezcan de medios para sufragarla. En materia penal, la defensa legal de prestará obligatoriamente a quienes determine la ley de la materia.
	ARTÍCULO NUEVO. Artículo 250 "A": Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil es una institución profesional de carácter civil y jerarquizada destinada a proteger el ejercicio de los derechos y libertades de las



000040

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

personas, prevenir, investigar y combatir los delitos y otros hechos ilícitos; y mantener el orden público y la paz. Es el único cuerpo policial armado con competencia nacional.

Conduce sus acciones con estricto respeto a los derechos humanos y bajo la dirección de las autoridades del Ministerio que tenga a su cargo la seguridad de las personas y sus bienes. En materia de investigación penal, actúa bajo la dirección del Ministerio Público.

La Policía Nacional Civil se rige por lo preceptuado en la Constitución, su ley y demás leyes y reglamentos policiales.

La Ley de la Policía Nacional Civil regulará los requisitos y la forma de ingreso a la carrera policial, debiendo regir también el otorgamiento de despachos o grados, ascensos, promociones, traslados, sanciones disciplinarias y demás cuestiones inherentes a su organización y funcionamiento .



000041

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

CAPÍTULO VI

MINISTERIO PÚBLICO Y PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CONSTITUCION ACTUAL

ARTICULO 251. Ministerio Público.

El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica.

El jefe del Ministerio Público será el Fiscal General y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Deberá ser abogado colegiado y tener las mismas calidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y será nombrado por el Presidente de la República de una nómina de seis candidatos propuesta por una comisión de postulación, integrada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien la preside, los decanos de las facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de las Universidades del País, el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el Presidente del Tribunal de Honor de dicho Colegio.

Para la elección de candidatos se requiere el voto de por lo menos las dos terceras partes de los miembros de la Comisión.

INICIATIVA 4387

ARTICULO 251. Ministerio Público.

El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica.

El jefe del Ministerio Público será el Fiscal General y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Deberá ser abogado colegiado y tener las mismas calidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Será nombrado por el Presidente de la República de una nómina de seis candidatos propuesta por una comisión de postulación, integrada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien la preside, el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, un representante de los Decanos de las facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de las Universidades del



000042

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

En las votaciones, tanto para integrar la Comisión de Postulación como la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación.

El Fiscal General durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El Presidente de la República podrá removerlo por causa justificada debidamente establecida.

País, el presidente de la Junta Directiva y el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

Para la elección de candidatos se requiere el voto de por lo menos tres de los cinco integrantes de la Comisión.

En las votaciones, tanto para integrar la Comisión de Postulación como la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación.

El Fiscal General durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El Presidente de la República podrá removerlo por causa justificada debidamente establecida.

La Ley Orgánica del Ministerio Público regulará los requisitos y la forma de ingreso a la carrera fiscal, ascensos, traslados, sanciones disciplinarias y demás cuestiones inherentes a su organización y funcionamiento.



000043

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

ANÁLISIS Y COMENTARIOS DE LA COMISION A LA INICIATIVA 4387.

La Comisión considera que la propuesta de reforma constitucional propuesta por los señores diputados y que inicialmente fuera promovida por Universidad de San Carlos de Guatemala, Universidad Rafael Landívar y Asociación de Investigación y Estudios Sociales, contiene elementos muy importantes que de ser aprobados pueden sin duda alguna significar y producir un cambio en la administración de justicia y por ende a favor de todas las personas usuarias de los servicios de justicia, para los mismos operadores del sector, las instituciones y el país en general.

Propone la iniciativa de reforma constitucional reafirmar los aspectos de independencia tanto económica como funcional del Organismo Judicial.

La carrera judicial como un elemento indispensable para la capacitación, especialización y profesionalización que abarca de acuerdo a la propuesta desde los jueces de paz, hasta magistrados de salas de apelaciones y tribunales de igual categoría, considera la Comisión es una propuesta viable, conveniente y oportuna.

Asegura la carrera judicial la independencia de los jueces y magistrados, garantiza la autonomía de las decisiones judiciales, consagra la inamovilidad necesaria en esos cargos, y también permite establecer una mayor responsabilidad para los juzgadores, tanto en sus resoluciones como en su hoja de vida profesional. Adicionalmente permite la fiscalización, evaluación de desempeño y auditoria no solo de las autoridades judiciales, sino de la propia sociedad.

En cuanto al plazo del período de los jueces y magistrados al momento de ser electos que se propone sea mayor, pasando de cinco a diez años, esta Comisión considera que es prudente y procedente dicha ampliación, lo que permitirá alejar la elecciones, designaciones y nombramientos del constante procedimiento de renovación practicado en la actualidad, pero hace notar la Comisión al Pleno del Congreso de la Republica, la necesidad de discutir las propuestas alternas hechas en las audiencias públicas realizadas sobre este tema, y que están referidas a



000044

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales*

Congreso de la República

Guatemala, C. A.

plazos más largos en esos nombramientos e incluso aprobar nombramientos de plazo indefinido o vitalicio.

La creación de un Consejo de la Carrea Judicial es también de vital importancia para cambiar las actuales estructuras y manejo del Organismo Judicial, la separación de las funciones administrativas de las jurisdiccionales es una imperiosa necesidad.

A este respecto la Comisión hace la observación al Pleno del Congreso de la República sobre otras propuestas alternas que pueden ser la creación de una camada administrativa dentro de la Corte Suprema de Justicia con funciones estrictas y separadas de la función jurisdiccional o la integración del Consejo de manera diferente, como por ejemplo la propuesta hecha por la propia Corte Suprema de Justicia en la propuesta hecha a la Comisión y que específicamente se adjunta como un anexo a esta opinión.

La revisión de la Comisión de Postulación para elegir candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se considera que es indispensable. Actualmente existen cerca de quince Facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales. Ello de inmediato obliga a que habiendo quince decanos que integran la Comisión de Postulación, igual número se integre por parte de los Magistrados de Salas de Apelaciones y representantes electos por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. El crecimiento de estos centros de estudio y creación de nuevas facultades de la materia, provoca en la forma que actualmente de acuerdo al texto Constitucional está regulado, una Comisión de Postulación que por su número de integrantes se verá prácticamente inmanejable amen de las demás circunstancias que rodean todas esas postulaciones.

Considera prudente la Comisión de mantenga la elección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia por parte de la más alta representación nacional, el Congreso de la República.

Consideramos que la elección de quienes dirigen un Organismo del Estado, no puede producirse por una instancia o entidad inferior al propio Organismo.



000045

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales

*Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

Cabe reafirmar lo ya escrito sobre el período de los magistrados y la comisión que los postula.

En cuanto al período del Presidente de dicho Organismo, la Comisión considera que esa presidencia no puede ser rotativa y por un período de un año. Es conveniente una Presidencia de período más largo, al menos de la mitad del período fijado para los magistrados o al menor por cinco años para elaborar con eficiencia planes quinquenales que permitan mantener políticas estables en la administración de justicia.

También es conveniente que el Pleno del Congreso de la República considere la posibilidad de renovación de la Corte Suprema de Justicia en períodos graduales, criterio que es de esta Comisión, pues ello permitirá la estabilidad, eficiencia, conocimiento, y transmisión de ellos.

Los aspectos relacionados con la asistencia legal gratuita propuestos en la iniciativa son también criterios importantes para asegurar a todas las personas la adecuada defensa de sus derechos, permite conseguir o facilitar el acceso a la justicia y el derecho a la igualdad ante la ley. Priorizar la defensa de la persona y sus derechos es un deber del Estado y un anhelo de un sistema democrático y de un Estado de Derecho.

De igual manera, hacer más eficiente, garantizar la estabilidad y dotar de recursos al Ministerio Público como parte importante del sistema de administración de justicia, es relevante a criterio de esta Comisión. Un órgano prosecutor eficiente, con verdadera capacidad de investigación, permita disminuir la impunidad y permitirá dentro del marco legal un combate frontal a la delincuencia, criminalidad y corrupción en el país.

Desea hacer notar la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que aún cuando en la iniciativa que se analiza no está contemplado el aumento en el porcentaje Constitucional fijado al Organismo Judicial, si en varias de las audiencias se hace mención al tema, lo que es apoyado por nosotros creyendo que duplicar ese presupuesto por lo menos, no solo garantiza de mejor manera la



000046

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales

Congreso de la República

Guatemala, C.A.

funcionalidad y independencia de la administración de justicia, sino contribuye a la autonomía, libertad de criterio y eficiencia de los jueces y magistrados.

Igual consideración se hace con respecto al Ministerio Público a quién debe de asignársele recursos suficientes, seguros y anticipados.

La Comisión considera que en lo relacionado con la Policía Nacional Civil, elevar a rango constitucional el reconocimiento de esta institución de seguridad, reafirma el carácter democrático de nuestro Estado, cumple con los postulados de primacía del poder civil e institucional. Sin embargo recomienda la Comisión revisar la redacción propuesta, ya que se considera que de la manera como esta, crea un modelo unitario rígido que no podría ser modificado por leyes ordinarias que en su momento respondan a necesidades en el campo de la seguridad y la justicia, sobre todo en el campo de la investigación criminal.

En consecuencia La Comisión opina que el Órgano Constituyente constituido (Pleno del Congreso de la República) puede aprobar este tipo de reforma, y cabe aquí citar lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad en Expediente 931-98, que en su parte conducente expone:

"La posibilidad de acudir a la reforma, total o parcial, de la normativa constitucional lleva a advertir la línea que separa al poder constituyente del poder constituido o de reforma, partiendo del principio de que ambos tienen diferente sustento. En efecto, el primero es el poder originario en sentido estricto, creador del texto fundamental por un acto unilateral supremo, de carácter predominantemente político, en tanto que el segundo es poder derivado o constituido, creado por el primero y, por ende, con limitaciones de carácter jurídico por su vinculación con los límites de procedimiento que, para la reforma constitucional, es preciso respetar. De ahí que para reformarla se deba cumplir con el procedimiento establecido y respetar los límites que la propia norma fundamental establece. Esta distinción entre poder constituyente y poder constituido viene precisada no sólo por la doctrina contemporánea (Tratado de Derecho Constitucional. Miguel Ángel Ekmekdjian. Tomo III. Págs. 156 a 159. Ediciones De Palma, Buenos Aires. 1995) sino por jurisprudencia de tribunales en países de similar estructura constitucional



000047

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

que el nuestro, a cuyo efecto puede citarse la sentencia setenta y seis diagonal mil novecientos ochenta y tres (76/1983) de cinco de agosto de mil novecientos ochenta y tres del Tribunal Constitucional de España, que afirmó: "Lo que las Cortes (equivalentes de Congreso) no pueden hacer es colocarse en el mismo plano del poder constituyente realizando actos propios de éste, salvo en el caso en que la propia Constitución les atribuya alguna función constituyente. La distinción entre poder constituyente y poderes constituidos no opera tan sólo en el momento de establecerse la Constitución; la voluntad y racionalidad del poder constituyente, objetivadas en la Constitución, no sólo fundan en su origen sino que fundamentan permanentemente el orden jurídico y estatal y suponen un límite a la potestad del legislador.

Al Tribunal Constitucional corresponde, en su función de intérprete supremo de la Constitución custodiar la permanente distinción entre la objetivación del poder constituyente y la actuación de los poderes constituidos, los cuales nunca podrán rebasar los límites y las competencias establecidas por aquel.

Sobre el particular se debe, en primer lugar, reconocer que el Congreso de la República tiene facultad para constituirse en poder constituyente derivado, con capacidad para aprobar textos de reforma de la Constitución Política, exceptuando los referidos en el Capítulo I del Título II y sus artículos 278 y 281. Su actuación, que tiene una demarcación jurídica que no le es permisible rebasar, alcanza su objetivo cuando por la mayoría de votos requerida aprueba aquellos textos que introducen enmiendas a los ya existentes, cuyo fondo se orienta en sentido distinto, aceptando la incorporación de elementos ideológicos o normativos no considerados o previstos en la concepción original del texto matriz;"

CONCLUSIONES DE LA COMISION

1. El Pleno del Congreso de la República traslado a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales la iniciativa de reforma a la



000048

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

Constitución Política de la República de Guatemala, resolviendo ese traslado para estudio y dictamen correspondiente.

2. La Comisión a efecto de cumplir con el mandato del Pleno del Congreso de la República, autoridad máxima del Organismo Legislativo, de estudiar la propuesta y emitir un dictamen, cumple con ello, con las reservas ya consideradas de la limitación a que está sujeta esta comisión por razones de no ser un órgano constituido con facultades de conocimiento y decisión, dado que solo el Pleno del Congreso de la República es mencionado como tal en nuestra Constitución.
3. De las audiencias públicas realizadas la Comisión puede concluir:
 - a. Que la mayoría de ciudadanos que se presentó a las audiencias y expuso sus argumentos, está de acuerdo con reformar el texto constitucional en materia de seguridad y justicia, aun cuando algunas se expreso no considerar suficientes y completas las mismas.
 - b. Que las propuestas de reforma Constitucional fueron apoyadas por la mayoría de los expositores en las audiencias realizadas.
 - c. Que a juicio de la Comisión el número de instituciones, asociaciones o grupos, expositores y participantes, así como de los argumentos y documentos aportados constituyen una muestra valida del pensamiento de la sociedad guatemalteca y de los ciudadanos sobre las propuestas de reforma constitucional.
 - d. Que para ilustrar al pleno, se adjunta a esta opinión los documentos presentados por los expositores, haciendo énfasis en dos de las exposiciones que se adjuntan como anexos 1 y 2, formulados por la Corte Suprema de Justicia y el Señor Magistrado de la Corte de Constitucionalidad don Roberto Molina Barreto.



000049

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

4. Del análisis de los miembros de la Comisión puede manifestarse al Pleno que la mayoría de miembros de la Comisión está de acuerdo con las propuestas de reforma Constitucional planteadas:
- a. Tomando en cuenta siempre las limitaciones legales a que está sujeto el Pleno como Órgano Constituido.
 - b. Por considerar que las propuestas pretenden modificar artículos que están dentro de las facultades del Congreso de la República como Órgano Constituyente Constituido.
 - c. Se considera que el planteamiento de la iniciativa 4387 contiene una reforma que es procedente y que de ser aprobada mejorara substancialmente el sistema de administración de justicia.
 - d. Que respetando y sujetándose al criterio, disposiciones, resoluciones y autoridad del pleno del Congreso de la República, emite esta opinión, adjunta los documentos y pretende informarle de lo actuado y obtenido.
 - e. Que considerando la importancia de lo propuesto en las dos iniciativas, el Pleno del Congreso de la República como Órgano Constituido deberá conocer las mismas en sesiones convocadas especialmente para ello y como único punto de agenda, separando las sesiones ordinarias o extraordinarias que traten asuntos ordinarios, de las señaladas para el conocimiento de las propuestas de reforma constitucional.
 - f. Que La Comisión conociendo sus limitaciones se abstuvo de hacer modificaciones a los textos propuestos y de concluir en aprobaciones o no, dado que esa facultad de conformidad con el artículo 280 de la Constitución Política de la República de Guatemala, solo compete al Congreso de la República.



000050

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

En consecuencia la COMISION DE LEGISLACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, como un órgano de estudio y conocimiento de los asuntos que a su consideración le someta el Pleno del Congreso de la República y cumpliendo con el requerimiento de dictamen para lo que le fuera trasladada la iniciativa de mérito, (artículo 7, 27 y 39 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 63-94 del Congreso de la República) remite este informe con las observaciones, documentos, comentarios y opinión correspondiente.

Dado en la sala de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales en la ciudad de Guatemala, el día dieciséis de julio de dos mil doce.

Oliverio García Rodas
Presidente

José Alberto Gándara Torrebiarte

Juan José Porras Castillo

Carlos Enrique López Girón

Pedro Gálvez Hernández



000051

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

Amílcar de Jesús Pop Ac

Voto Razonado

Jorge Mario Barrios Falla

Carlos Valentín Gramajo Maldonado

Mario Rolando Torres Marroquín

Manuel de Jesús Barquín Durán

José Alejandro Arévalo Alburéz

Luis José Fernández Chenal

Edgar Romeo Cristiani Calderón

Delia Karina Rivera Romero de Paniagua

PRESENTACIÓN ANTE EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

000052

“LA IMPERATIVA REFORMA CONSTITUCIONAL Y LA JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMA INTEGRAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA NACIONAL”

Magistrado Roberto Molina Barreto

I. INTRODUCCIÓN

Como es del conocimiento público, en los últimos tiempos, varios proyectos de reforma a nuestra Carta Magna han sido propuestos, todos ellos, por una u otra razón, sin fructificar y no es sino hasta hace algunos meses, cuando nuevamente y de una manera seria, el tema de las reformas a la Constitución fue abordado desde un punto de vista académico y técnico, mediante el proyecto presentado por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad Rafael Landívar. Dicha propuesta, a tenor de lo dispuesto en el artículo 277 de la Constitución, fue tomada como base por 10 de los diputados que integran el Congreso de la República, y presentaron la iniciativa de Ley No.4387.

Cuando me encontraba ejerciendo la Presidencia de la Corte de Constitucionalidad durante el período 2010-2011, mencioné mi interés de impulsar una reforma constitucional exclusivamente en lo que al sector justicia se refiere y sí empecé a trabajar en ello. Posteriormente, al ser electo como magistrado titular para integrar la Corte de Constitucionalidad para el período 2011-2016 por la Corte Suprema de Justicia, enfatice mi compromiso de coadyuvar a la mejora del sistema de justicia nacional del País y de esa cuenta, presenté ante la Corte de Constitucionalidad un proyecto propio de reforma, a finales del mes de mayo del año en curso, conteniendo **una propuesta integral de reforma constitucional al Sistema de Justicia Nacional**.

Actualmente, consciente de la necesidad de reformar la Constitución, he dejado de impulsar dicha propuesta, para sumarse a los esfuerzos conjuntos de la iniciativa 4387, la que he analizado con detenimiento y me complace de sobremanera que el camino hacia lo que yo denomino la **“Imperativa Reforma de la Constitución”** se haya iniciado ya y esté dando sus primeros pasos.

De esa cuenta, es mi deseo el poder contribuir al enriquecimiento de la misma, con algunos cambios o sugerencias en temas de vital importancia que

creo son susceptibles de ser mejorados o que no han sido contemplados y que en mi criterio, no deben soslayarse, tal es el caso de la integración y funcionamiento del Tribunal que me honro en integrar –la Corte de Constitucionalidad-, entre otros aspectos relativos al sistema de justicia nacional.

Aplaudo el hecho que en la referida iniciativa, el texto de varias de las reformas que se proponen haya tenido como base el Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral suscrito en Estocolmo, Suecia el 7 de diciembre de 1996, habiéndose tomado en cuenta temas como: las garantías para la administración de justicia, la carrera y el consejo de la carrera judicial, los funcionarios del Organismo Judicial, la Policía Nacional Civil, entre otros.

Cabe resaltar que durante los períodos presidenciales de la última década (2000-2011), hemos visto como la sociedad guatemalteca ha venido experimentando una desarticulación de la mayor parte de los órganos e instituciones del Estado, mediante reiterados actos de corrupción, narcotráfico, contrabando, secuestros, asesinatos y violencia en general; incluso la proliferación de delitos cometidos por funcionarios y ex funcionarios públicos.

Ante tales circunstancias, se evidencia que las instituciones, que integran el sistema de justicia nacional, no pudiendo dejarse de lado la relativa a la justicia constitucional, se encuentran politizadas, debilitadas y socavadas, azotadas, en muchos de los casos, por el flagelo de la corrupción y el abuso de poder, lo que redundará, en última instancia, **en la impunidad, y la imposibilidad del Estado de cumplir con su deber de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado a fin de poder garantizar a los habitantes de la República, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y, en última instancia, el desarrollo integral de la persona.** (Art. 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala).

Esos convulsionados cambios y sucesos acaecidos en la evolución de la sociedad guatemalteca desde la promulgación de la Carta Magna en 1985, determinan la necesidad de adaptar el contenido constitucional a la realidad jurídico-político-social actual, en muchos de los aspectos que ésta contempla, pero especialmente **en lo que al fortalecimiento de la administración de justicia se refiere.**

II. JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMA INTEGRAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA NACIONAL:

Con base en lo referido con antelación, resulta **imperativo**, en lo que al aspecto del sistema de justicia nacional concierne, que la reforma constitucional que se lleve a cabo tome en cuenta la integración y funcionamiento de instituciones como la Corte Suprema, Tribunales de Justicia, demás órganos que integran o intervienen el sistema de administración de justicia a nivel nacional y de la Corte de Constitucionalidad, así como del perfil de los funcionarios a cargo de las mismas y de los procedimientos relativos a su elección, designación o nombramientos respectivos.

En ese orden de ideas, para efectos didácticos, en lo sucesivo, me referiré a dichas reformas, puntualizando ciertos aspectos que considero de relevancia que sean tomados en cuenta, agrupándolas en dos grandes ejes, **el primero** que contempla al Organismo Judicial y a otras instituciones que forman parte del sistema de justicia nacional; y **el segundo** que se referirá única y exclusivamente a la integración y funcionamiento de la Corte de Constitucionalidad, **materia que no ha sido contemplada en la iniciativa de reforma 4387.**

A) EJE NÚMERO UNO: ORGANISMO JUDICIAL E INSTITUCIONES QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA DE JUSTICIA NACIONAL.

A.1) ORGANISMO JUDICIAL

- **CARRERA JUDICIAL.** Es vital el reconocimiento de la Carrera Judicial como una de las garantías del Organismo Judicial y su establecimiento constitucional para garantizar la profesionalización e independencia de jueces y magistrados, considerándose necesario que la misma sea administrada por el Consejo de la Carrera Judicial, tal y como figura en la iniciativa de ley analizada, en los artículos 205, 208 y 209 Constitucional, cuyos textos son sustituidos por los artículos 1, 2 y 3 de la iniciativa. No obstante lo anterior, y siendo que la iniciativa propuesta carece de ello, **se advierte la necesidad de que la carrera judicial abarque desde la judicatura de paz hasta la propia Corte Suprema de Justicia**, sugiriéndose la evaluación de la conveniencia de privilegiar la Carrera Judicial y que el sistema de elección de los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia sea mixto, con un número de magistrados (7)

electos por el Congreso a propuesta del Consejo de la Carrera Judicial y un número de magistrados (6) electos por el referido Organismo, pero a propuesta de la Comisión de Postulación correspondiente, como se expondrá más adelante.

- **CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL.** En lo relativo al mencionado Consejo, y debido a que la iniciativa en mención omite consignar la integración del Consejo de la Carrera Judicial, **se advierte la necesidad de que el mismo quede integrado constitucionalmente, de manera representativa y proporcionada**, sugiriéndose la siguiente fórmula: a) el Presidente del Organismo Judicial, quién lo presidirá; un representante titular y un suplente electos por: b) la Asamblea de Jueces, c) la Asamblea de Magistrados, d) el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala; y e) los Decanos de Derecho o Ciencias Jurídicas de las Universidades del país. Debiendo consignarse el plazo de duración de sus cargos, la facultad o no de reelección y por supuesto lo relativo a que una ley específica regulará la materia.

Con la reforma sugerida, se persigue garantizar la estabilidad, idoneidad e independencia judicial, mediante una eficaz selección y administración del personal del Organismo Judicial, desde sus más altos funcionarios, a cargo de un cuerpo técnico, administrativo, especializado, cuyo reconocimiento constitucional deviene necesario, al igual que sucede con los otros dos Organismos del Estado, el Consejo de Ministros para el Ejecutivo y la Junta Directiva y Comisión Permanente, para el Legislativo. **La integración sugerida resulta un tanto innovadora, al incluirse la participación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y de la academia por medio de las Universidades del país, con la necesaria supresión de la participación que actualmente tiene el personal administrativo del Organismo Judicial.**

- **ANTEJUICIO FUNCIONAL.** Siempre en referencia al tema de la independencia judicial, **no me cansaré de insistir en que se considera necesario** que, a efecto de fortalecer la garantía a la referida independencia y la protección que la investidura de la judicatura implica, también se incluya el derecho de antejuicio “funcional” para magistrados y jueces durante el ejercicio de su cargo, **pero también después del cese de éste, siempre que se trate de actos sucedidos durante el desempeño de sus funciones jurisdiccionales y como consecuencia de éstas.**

Creo que este punto es fundamental para fortalecer el sistema de justicia nacional y debe ser susceptible de un riguroso análisis

para lograr su inclusión en la iniciativa de reforma constitucional discutida, pues lo que se persigue es evitar que los titulares de la judicatura se vean de alguna manera limitados en su independencia jurisdiccional y en el desempeño de la magistratura para motivar y arribar a sus decisiones plasmadas en las diferentes resoluciones que emiten, sino que se sientan en completa libertad, sin la idea o muchas veces presión de que se encuentran bajo amenaza de ser incriminados luego de cesar en sus cargos o ser susceptibles de amenazas, represalias o perturbación en su vida privada. Al efecto, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, de alguna manera garantiza dicha independencia, entre otros en su artículo 167 al referir que los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad *"no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo..."*. (En consonancia con lo anterior, fue emitida la Opinión Consultiva de la Corte de Constitucionalidad del 21 de diciembre de 2010, expediente 3003-2010, relativo a la Ley contra la Obstrucción de la Justicia, vetada por el Ejecutivo).

- **INCOMPATIBILIDADES.** Para coadyuvar con lo que implica el ejercicio de la función jurisdiccional y el perfil del profesional que tendrá a su cargo tan alta investidura, es que se considera también imperativo que en el artículo 207 del texto constitucional que refiere los requisitos para ser magistrado o juez, **se eleve al texto constitucional lo relativo a las incompatibilidades de la función jurisdiccional** con cualquier otro empleo, con cargos de dirección y asesoría de instituciones políticas, de sindicatos o entidades que reciban fondos del Estado, o que sean parte de la administración del Estado, así como con la calidad de ministro de cualquier religión o culto y con el ejercicio profesional, exceptuándose, el ejercicio de docencia, siempre que ésta no entre en conflicto de horario con la judicatura.
- **PERÍODO DE FUNCIONES.** En relación a la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones, Jueces de Primera Instancia y Jueces de Paz, **se considera atinada la ampliación del período de funciones a 10 años**, ello siendo que actualmente el período constitucional de funciones para jueces y magistrados se encuentra limitado a cinco años, esto no constituye garantía de estabilidad e independencia alguna. Por lo anterior, el plazo propuesto en la iniciativa analizada resulta más adecuado y además congruente con

las reiteradas recomendaciones que ha formulado el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, en lo que a la duración de dicho mandato judicial se refiere para asegurar la continuidad, la permanencia, la independencia y en general el buen funcionamiento en la administración de justicia.

- **INTEGRACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.** En lo relativo a la integración de la referida Corte, la iniciativa analizada conserva el mismo número de magistrados que la integran y su organización en cámaras, con lo que concuerdo; en lo relativo al período presidencial de la misma, éste se eleva a la mitad (5 años) del período de funciones de la Corte (10 años), **lo que también es atinado.**
- **PRESIDENCIA DEL OJ.** En la iniciativa analizada, se contempla que la elección del presidente se hará con el voto favorable de las dos terceras partes y que en caso de falta temporal de éste, será sustituido por los demás magistrados que integren la Corte Suprema de Justicia, en el orden de su designación. En relación a este tema, se considera necesario regular dicha elección de la mejor manera posible, detallando el número de votos que constituye tal mayoría e incluyendo lo relativo al orden de sustitución al que deberá atenderse en caso de falta temporal del Presidente del Organismo Judicial, que ha ocasionado tanto "*que hacer*" en la actualidad y que debe hacerse de acuerdo al orden de las vocalías que integran la Corte Suprema de Justicia.

Para tales efectos, cabe recordar lo que el artículo 215 de la Constitución Política de la República de Guatemala en su versión original establecía: "Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el Congreso de la República para un período de seis años (...) Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia elegirán entre sus miembros al Presidente de la misma (...)". Habiendo introducido la reforma constitucional de 1993 el concepto de presidencia anual rotativa, como una respuesta normativa a situaciones coyunturales, quedando la norma reformada de la siguiente manera: "Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia elegirán, entre sus miembros, con el voto favorable de las dos terceras partes, al presidente de la misma, el que durará en sus funciones un año y no podrá ser reelecto durante ese período de la Corte (...)".

Sin embargo, la práctica durante todos estos años, reiteradas acciones presentadas en cuanto al asunto ante la Corte de Constitucionalidad, así como los estudios sobre el sistema de justicia realizados desde que se introdujeron tales reformas constitucionales,

evidencian que éstas han resultado contraproducentes, por los procesos de cabildeo y negociación que deben realizar quienes aspiran a la presidencia y el desgaste e inversión de tiempo efectivo de trabajo que ello conlleva, aunado a la prohibición de reelección dentro del mismo período constitucional.

Es por ello que el suscrito hace énfasis, en la inclusión de los aspectos antes mencionados, ***-voto favorable de por lo menos 9 de los 13 magistrados, para la elección del Presidente de la Corte Suprema de Justicia- y -en caso de falta temporal del mismo o cuando no pueda conocer, su sustitución por los demás magistrados, en el orden de las vocalías que integran la Corte Suprema de Justicia-***.

- **ELECCIÓN MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.** Disiento del criterio vertido en la reforma propuesta en la iniciativa analizada que contempla que éstos “*serán electos por el Congreso de la República para un período de 10 años, de una nómina propuesta por una comisión de postulación...*” pues como dije, **se considera indispensable privilegiar la Carrera Judicial y que ésta abarque desde la judicatura de paz hasta la propia Corte Suprema de Justicia**, para el efecto se sugiere la conveniencia de analizar que los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia sean electos por el Congreso de la República mediante un sistema de elección mixto, es decir, con un número de magistrados (7) electos por el Congreso a propuesta del Consejo de la Carrera Judicial (privilegiándose a quienes gocen de dicha carrera) y un número de magistrados (6) electos por el referido Organismo, pero a propuesta de la Comisión de Postulación correspondiente, (dando la oportunidad a abogados con ejercicio profesional liberal).
- **COMISIÓN DE POSTULACIÓN.** En cuanto a la integración de la Comisión de Postulación mencionada, también disiento de la forma de integración contenida en la iniciativa analizada, pues la experiencia en los últimos años en cuanto al tema habla por sí misma, **debe atenderse a una reducción sustancial de los integrantes** de la referida comisión, como la iniciativa lo dispone, pero el suscrito sugiere se integre con cuatro representantes de los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas de las universidades del país, el de la Universidad de San Carlos de Guatemala y tres electos de las universidades privadas, cuatro representantes electos por la Asamblea General del Colegio de

Abogados y Notarios de Guatemala y cuatro representantes electos por los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones, quienes deberán elegir a su presidente en la primera reunión. La forma de integración sugerida, atiende a que resulta necesario promover la representación del sector académico, en este caso, de las Universidades del país que cuentan con facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales, de manera equitativa con el resto de sectores que conforman la Comisión en mención, el profesional y el judicial, motivo por el cual considero debe ser suprimida la integración de un representante de los rectores de las universidades del país, cuya participación por parte de la academia, podría traducirse más a nivel político y de autoridad, y no técnico-jurídica, lo que resulta atinado con la participación de los cuatro representantes de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de las Universidades del país, las que a la presente fecha han ido en aumento, por lo tanto se considera necesaria la representación. **Esto permitiría que dicha Comisión pueda cumplir con su cometido con eficacia y de manera más eficiente y menos politizada.**

- **RENOVACIÓN PARCIAL Y NORMA TRANSITORIA.** En lo relativo a la renovación parcial por bloques que se propone en la iniciativa bajo análisis, con base en lo anteriormente sugerido, se advierte la necesidad de que para su integración, la Corte Suprema de Justicia sea renovada a la mitad del plazo establecido (5 años) en el número de seis o siete magistrados, **debiendo atenderse a la proporcionalidad correspondiente de acuerdo al sistema mixto propuesto de elección por el Congreso de la República.** Tomándose en cuenta tales circunstancias, es que deberá redactarse la norma transitoria correspondiente para poder llevar a cabo la integración de Corte Suprema de Justicia período 2014-2024, previéndose por única vez un vencimiento anticipado (5 años) del plazo para el ejercicio de la función jurisdiccional de 6 de los magistrados electos.
- **JUBILACIÓN OBLIGATORIA.** Un aspecto de suma importancia es el hecho de consignar que el límite de edad de la jubilación obligatoria aplica únicamente en relación a los magistrados electos propuestos por el Consejo de la Carrera Judicial; no así para los magistrados que provienen del ejercicio liberal de la

profesión, propuestos por la Comisión de Postulación, respectiva, para quienes dicha limitación aplicará solamente en caso de su reelección.

- **ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.** En cuanto al tema del Organismo Judicial y las demás instituciones que integran el sistema de justicia nacional, considero también necesario enfatizar sobre la importancia de que en el propio texto constitucional, **se eleve la asignación presupuestaria correspondiente para el buen funcionamiento del Organismo Judicial en el porcentaje que de acuerdo a un análisis técnico sea el pertinente para el efecto**, pues es conocido por todos que de acuerdo a estudios realizados por diferentes institutos de investigación y analistas económicos y políticos del país, resulta totalmente incoherente que tan Alto Organismo de Estado tenga asignado un porcentaje menor que la asignación presupuestaria que constitucionalmente corresponde al deporte, aunado a que, entre otros, de esta asignación presupuestaria, debe ser asignada, a su vez, una asignación no menor del 5% para el funcionamiento de la Corte de Constitucionalidad.

En tal virtud, con el fin de proveer de los recursos económicos necesarios a todas las instituciones que integran el sistema de justicia nacional, resulta imperativo que el artículo que las regula constitucionalmente les dote del presupuesto adecuado, mediante asignaciones de porcentajes mínimos, con la consiguiente responsabilidad en caso de incumplimiento en la entrega de las mismas por parte del órgano correspondiente, siendo ésta una problemática que constantemente se repite y que impide el buen funcionamiento y cumplimiento de los fines y funciones que le han sido encomendadas al órgano estatal encargado de impartir justicia en el país y demás instituciones que integran el sistema de justicia nacional, las que en muchas ocasiones hemos visto al punto del colapso por falta en la entrega efectiva de su asignación presupuestaria.

A.2) OTROS ORGANOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE JUSTICIA NACIONAL.

Siendo que el Derecho es orden y que debe guardarse una organización sistémica dentro de la Constitución, en atención a ello,

se sugiere que el actual capítulo VI, contenido dentro del Título V relativo a la Estructura y Organización del Estado, se denomine "*Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación y Otros Órganos del Sistema de Justicia Nacional*", en donde, según propuesta del suscrito, deberían incluirse en ese orden a partir del artículo 251 y 252, los artículos 252 *bis*, relativo al Sistema Penitenciario, *ter*, relativo a la Policía Nacional Civil y *quáter*, relativo a la Defensa Legal Gratuita. A los que me referiré de manera individual a continuación.

- **MINISTERIO PÚBLICO.** En atención a que el Ministerio Público constituye una institución de suma importancia en el sistema de justicia a nivel nacional y en congruencia con las atribuciones y fines que constitucionalmente le son asignadas a dicha institución, específicamente el **de velar por el estricto cumplimiento de las leyes**, el suscrito disiente de la propuesta de reforma del texto constitucional del artículo 251, contenida en la iniciativa analizada, sugiriendo que la misma atienda a principios democráticos, representativos y de equilibrio y se evalúe la propuesta relativa a que **el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público sea nombrado por el Congreso de la República, con mayoría calificada**, quien también podrá removerlo con igual mayoría, según causa justificada, debidamente establecida, **y no que dicho nombramiento siga recayendo en el Presidente de la República.**

En cuanto a la integración de la comisión de postulación prevista, se aprecia que la misma en relación con la actual, permanece básicamente incólume, encontrándose reducida la representación de los Decanos de las Facultades de Derecho y Ciencias Jurídicas y Sociales de las Universidades del país, con lo cual se concuerda totalmente, por las razones apuntadas relativas a las Comisiones de Postulación para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Siendo que esta institución juega un papel de suma importancia en el sistema de justicia nacional, también sugeriría que en consonancia con el aumento del plazo para el ejercicio de la función jurisdiccional de jueces y magistrados, el período de funciones del Fiscal General de la República **se extienda de igual manera, a diez años, pudiendo ser reelecto, a efecto de fortalecer el sistema de justicia nacional y la carrera fiscal.**

- **PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.** En atención a que dicha institución tiene a su cargo la asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales y que el titular a su cargo ejerce la representación del Estado de Guatemala, **se considera de vital importancia que en la iniciativa analizada se contemple lo relativo a ampliar su período de funciones de 4 a 5 años y que se introduzca el mecanismo de comisión de postulación igual a la del Ministerio Público, pero que por las razones apuntadas, la facultad de designación y remoción siga recayendo en el Presidente de la República**, de una nómina de seis candidatos que deberá ser propuesta por la Comisión de Postulación de mérito, a efecto de coadyuvar con éste en la selección del profesional con el perfil idóneo para un cargo de tanta envergadura, y también conserva la facultad de remoción de dicho funcionario, según causa justificada, debidamente establecida.

Ello, justificado en el hecho de que constitucionalmente el Presidente de la República es el Jefe del Estado de Guatemala y le corresponde la representación de la unidad nacional, debiendo velar por los intereses de toda la población de la República. En tal virtud, correspondiendo al Procurador General de la Nación la representación del Estado y la función de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales, resulta atinado su nombramiento y remoción por parte del Presidente de la República, tal y como se propone por un plazo de cinco años pudiendo ser reelecto, a efecto de asegurar la alternabilidad. Esta institución no ha sido incluida en la iniciativa de reforma analizada.

- **SISTEMA PENITENCIARIO.** En la iniciativa analizada, no se contempla nada relativo al Sistema Penitenciario. **Sin embargo, se considera de vital importancia, que, al igual que ocurre con la Policía Nacional Civil, se constitucionalice el Sistema Penitenciario**, como un órgano del sistema de justicia, reconociendo la necesidad de aplicación de los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que Guatemala sea parte en esta materia, garantizando su adecuado funcionamiento.
- **POLICÍA NACIONAL CIVIL.** En cuanto a la Policía Nacional Civil, con la reforma propuesta en la iniciativa analizada, se fortalece la institución y se dignifica la función policial reconociéndole

constitucionalmente, garantizando su adecuado funcionamiento y la profesionalización de sus miembros.

En este punto, únicamente quisiera hacer mención de que en atención a que debe consignarse que a dicho ente policial le corresponde *"prevenir, investigar y combatir los hechos punibles"*, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 112 del Código Procesal Penal, como órgano auxiliar de la persecución penal, no así *"prevenir, investigar y combatir los delitos otros ilícitos"*, como se consigna en el artículo 9, que adiciona el artículo 250 "A" de la iniciativa bajo análisis. Otro aspecto que debe ser analizado con detenimiento en relación a la iniciativa respectiva es el hecho de consignarse que ésta es el *"único cuerpo policial armado con competencia nacional"*.

Asimismo, debe evaluarse la conveniencia de consignar que ésta se encuentra bajo la dirección del *"Ministerio"* que tenga a su cargo la seguridad de las personas y sus bienes, como se establece en la iniciativa propuesta; sino más bien, la sugerencia radica en consignar que la Policía Nacional Civil dependerá de *la autoridad que tenga a su cargo la seguridad ciudadana...*, dejándolo abierto por posibles reformas futuras en la materia.

- **DEFENSA LEGAL GRATUITA.** De igual manera, el suscrito coincide con la reforma propuesta en el sentido de que resulta necesario que se instituye el derecho a la defensa legal gratuita, mediante la asistencia legal gratuita para quienes carezcan de medios para sufragarla. Para cual el suscrito considera que de la mano de ello debe incluirse la creación del Instituto de la Defensa Pública General, como un órgano del sistema de justicia nacional cuyo propósito fundamental sea garantizar la protección del derecho humano de defensa en todos los ámbitos, a través de la asistencia legal gratuita para quienes no puedan sufragarla, **de lo cual carece la iniciativa analizada.**

B) SEGUNDO EJE: INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD.

Las propuestas de reforma que el suscrito sugiere en cuanto a este tema, van encaminadas a **despolitizar de alguna manera su integración y garantizar su buen funcionamiento para el cumplimiento de su función esencial que es la ser la máxima defensora y garante del orden constitucional en Guatemala**. Es por eso que considero de vital importancia que las mismas sean incluidas en la iniciativa del Congreso de la República. (Artículos 268, 269, 270, 271 y 272).

- **ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.** En ese sentido, de igual manera que las instituciones mencionadas con anterioridad, es imperativo que se consigne de forma específica la asignación presupuestaria respectiva que deberá ser entregada por el órgano correspondiente bajo su estricta responsabilidad en caso de incumplimiento, **esto debido a la problemática que constantemente se repite y que impide el buen funcionamiento y cumplimiento de los fines y funciones que le han sido encomendadas a tan alto Tribunal Constitucional.**

La experiencia de más de seis años integrando dicho tribunal y haber estado a cargo de su presidencia durante el período 2010-2011, me hace proponer la reforma antes referida, debiendo consignarse una cantidad no menor del 5% del porcentaje mínimo del Presupuesto de Ingresos Ordinarios del Estado que corresponda al Organismo Judicial, cantidad que deberá entregarse a la Tesorería de la Corte de Constitucionalidad cada mes en forma proporcional y anticipada por el órgano que corresponda, cuyo titular, en caso de incumplimiento, incurrirá en las responsabilidades consiguientes, como ya se expuso.

- **INTEGRACIÓN.** Actualmente, la Corte de Constitucionalidad se integra con cinco magistrados titulares, de los cuales cada uno tiene su respectivo suplente (artículo 269 CPRG). El número de integrantes del Tribunal se eleva al número de siete, cuando el tribunal conoce de asuntos de inconstitucionalidad abstracta contra leyes, o en caso de apelaciones de acciones de amparo cuya decisión en primera instancia debe asumir la Corte Suprema de Justicia. Por disposición contenida en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, no es incompatible el ejercicio profesional con el cargo de magistrado suplente (artículo 169).

Esto último ha dado lugar dentro del foro a señalamientos, en su mayoría de carácter subjetivo, en los que se cuestiona el proceder de los

magistrados suplentes que pueden ejercer libremente la profesión de abogados y a su vez realizan funciones de jueces constitucionales, generando dubitación, por esa dualidad, en las decisiones en las que aquéllos participan.

Para evitar lo anterior, de acuerdo a la experiencia y al Derecho Comparado en relación a otros Tribunales Constitucionales, tanto en Europa, como América Latina, el suscrito sugiere que se analice la conveniencia de elevar el número de magistrados titulares que integran la Corte de Constitucionalidad actualmente (5) a un número que podría ser de 11, suprimiendo la figura de los magistrados suplentes. El referido número impar posibilitaría integrar al menos dos cámaras que en número de cinco (5) integrantes pudieran conocer, con equidad en la distribución del trabajo de los expedientes que ingresen a la Corte de Constitucionalidad, según ésta lo determine mediante el acuerdo correspondiente; y que, se eleve dicha integración en el número de siete (7) o nueve (9) magistrados para conocer los asuntos que se aluden en los incisos a) si se trata de inconstitucionalidad de leyes, b), e) y h) del artículo 272 del Texto Constitucional. La integración en todos los casos deberá realizarse por sorteo. **Lo que debe quedar consignado en el artículo 269 bis de la Constitución Política de la República, que podría denominarse Integración Especial.**

Como ya se aludió, con la reforma propuesta en cuanto a la integración, se propone eliminar la figura del magistrado suplente, y se entendería que si por alguna razón uno o varios de los magistrados –ahora todos titulares– que integran una de las cámaras de la Corte no pudiese o no pudiesen conocer de un asunto determinado, esa Cámara se integraría con alguno o algunos de los magistrados que integran la otra cámara. Y en el caso de que la integración del tribunal deba elevarse con el número de siete o nueve integrantes, la integración será realizada por sorteo, como ya se expuso.

- **PRESIDENCIA:** Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, al igual que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, deberán elegir a quien deba presidirla, con el voto favorable, en el caso de su integración por 11 magistrados, de 7 de sus miembros, mayoría que deberá consignarse específicamente, por las razones ya apuntadas con anterioridad al abordarse lo relativo a la Corte Suprema de Justicia.

En la regulación constitucional vigente (artículo 271), se establece que la Presidencia de la Corte de Constitucionalidad será desempeñada por los mismos magistrados titulares que la integran, en forma rotativa, por un período de un año, comenzando por el de mayor edad y siguiendo en orden

descendente de edades. Con ello se pretende que todos aquellos quienes hubiesen sido elegidos magistrados titulares de la citada Corte, estén en el mismo plano de igualdad para poder desempeñar la Presidencia del tribunal, lo que limita el ejercicio de ésta en un año.

La experiencia ha demostrado que el período de un año no suele ser suficiente para una debida ejecución de planes de trabajo en materia de administración de la institución. **De ahí, que debe evaluarse la posibilidad de que el período de funciones del presidente se amplíe a dos años por vía de la reforma que se propone**, con posibilidad de reelección, durante el período para el cual se designó al magistrado electo como tal, permitiendo que al menos 5 de sus integrantes tengan la posibilidad, si así les interesase, de ejercer el cargo de Presidente del mismo, requiriéndose para ello únicamente el ser electos como tales por sus pares (colegas magistrados), eso sí con una votación calificada como ya se expuso. Para el caso de vacancia, ausencia, inhibitoria o sustitución temporal del Presidente deberá sustituirle el magistrado de mayor edad en orden descendente.

- **PLAZO.** En el artículo 269 constitucional vigente, se establece que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad durarán cinco años en sus funciones. La tendencia que propugna por una mayor independencia funcional de los tribunales constitucionales, evitar interrupciones o suspensiones de acertados planes de trabajo que requieren lapsos de tiempo considerables y propiciar la profesionalización de una adecuada carrera judicial, aconseja elevar el plazo de duración de funciones de quienes integran aquellos, a manera de hacer más extenso dicho plazo. Al efecto, en consonancia con la propuesta relativa a la Corte Suprema de Justicia, debe evaluarse la conveniencia de contemplar el sistema de sustitución parcial. **Un plazo que se considera razonable es también el de diez años con facultades de reelección**, lo que contribuye de alguna manera a una mayor permanencia y continuidad en el ejercicio jurisdiccional y a la generación de mayor independencia entre el órgano designante y el magistrado designado.

Cabe recordar que dentro de las recomendaciones que ha formulado el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados está el de eliminar el plazo de cinco años para el ejercicio de la judicatura, por considerar que dicho plazo *"debilita el poder judicial, afecta la independencia de los jueces y el desarrollo profesional"*. En la legislación constitucional comparada, un promedio de duración del plazo es de nueve años. Como puede apreciarse de la lectura de los

artículos 159.3 de la Constitución española, 233 de la Constitución colombiana y 432 de la Constitución ecuatoriana.

De igual manera que en el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, a efecto de coadyuvar con la implementación de las reformas propuestas, en lo relativo a la extensión del período de funciones de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, deberá analizarse lo relativo a la inclusión de la norma transitoria correspondiente, la que en el caso de la sugerencia de la Integración de la Corte con el número de once magistrados y su funcionamiento por cámaras, podría establecer que la función ejercida por los magistrados titulares que hayan sido designados con anterioridad a la vigencia de la disposición contenida en el artículo 269 citado, se prorrogará para cumplir con el período de tiempo establecido en la misma, adquiriendo calidad de titulares los actuales magistrados suplentes por el período de tiempo restante y para completar el número de magistrados que deberán integrar el Tribunal, en este caso -11-, por esta única vez, la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, deberá elegir un representante por el período de cinco años, debiendo estarse a lo regulado en los artículos 269 y 271 del Texto Supremo para las designaciones de períodos subsiguientes.

- **DESIGNACIÓN.** El sistema actual de designación de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad es un sistema moderno, que posibilita amplia participación, no sólo de los poderes tradicionales del Estado, sino, además, de la academia y de la representación gremial del foro. Es considerado un sistema ejemplar e incluso inédito en Latinoamérica. Sin embargo, si el número de magistrados de la Corte de Constitucionalidad se incrementa, también debe incrementarse el número de magistrados a ser designados por los actuales estamentos designantes a los que se hace alusión en el artículo 269 de la actual Constitución Política de la República.

Para evitar señalamientos de marcada politización en la designación de aquéllos, el suscrito sugiere lo siguiente: i) **dejar una designación equivalente de dos (2) magistrados por cada uno de los Órganos del Estado: Pleno de la Corte Suprema de Justicia, Pleno del Congreso de la República y Presidente de la República, en Consejo de Ministros;** ii) **la academia podrá designar a dos (2) magistrados, uno por la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala y otro electo por el resto de Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades privadas del País;** y iii) la

Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios, deberá elegir a tres (3) magistrados.

En el caso de la academia, que actualmente es representada por la designación que realiza el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, según lo dispuesto en el inciso d) del artículo 269 de la Constitución, la experiencia ha evidenciado que las designaciones realizadas por aquel órgano colegiado, han posibilitado un prejuicio, sin basamento objetivo, de que únicamente profesionales que sean egresados de la universidad estatal pueden ser designados por el órgano colegiado antes indicado, lo cual ha excluido –indirectamente- a profesionales del Derecho egresados de universidades privadas.

Para eliminar el que pueda surgir este prejuicio y equipararlo a la propuesta en relación al eje que comprende al Organismo Judicial, en donde ya oportunamente se consideró una opción con un enfoque más adecuado, tanto en el aspecto técnico como jurídico, es que se contempla la representación de los Decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas de las Universidades del país, lo que posibilita que profesionales egresados de las diferentes casas de estudio estuvieran en la misma posibilidad que ahora tienen quienes son egresados únicamente de la universidad estatal, de ser designados como magistrados de la Corte de Constitucionalidad, además de privilegiar al gremio profesional, con la oportunidad de designación de 3 de los magistrados que integren el tribunal, por las características de representatividad y participación de que está revestida dicha designación, por ser llevada a cabo mediante un proceso de elección.

- **REQUISITOS PARA SER MAGISTRADO.** El artículo 270 de la Constitución Política de la República establece los requisitos que se requieren para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Se establecen sustancialmente, cuatro requisitos, listados del inciso a) al inciso d) del precitado artículo. Se considera atinado, para el adecuado ejercicio de la magistratura constitucional, instituir como otro de los requisitos, el de la edad, al igual que para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la que se sugiere sea elevada en cuarenta y cinco (45) años, por la madurez requerida en función de la importancia del ejercicio de la jurisdicción constitucional y la responsabilidad que ello implica.

A efecto de que la actuación del magistrado de la Corte de Constitucionalidad sea lo más despolitizada posible, se considera pertinente agregar, ya en el texto constitucional, lo relativo con la independencia funcional a que se alude en el artículo 167 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y la incompatibilidad en el ejercicio del

cargo a que se hace en el artículo 169 de la precitada ley, en consonancia con la propuesta similar que hice respecto de los jueces y magistrados del Organismo Judicial.

➤ **FUNCIÓN CALIFICADORA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD.**

En el artículo 272 de la Constitución Política de la República se establecen las funciones de la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, dentro de éstas no se establece taxativamente ninguna facultad de rechazo *in limine* respecto del conocimiento de asuntos que carezca de relevancia constitucional. Sin embargo, la facultad de abstenerse de conocer asuntos ha sido desarrollada por la Corte de Constitucionalidad en el ejercicio de su función jurisdiccional, mediante distintas resoluciones en las que, percatado el tribunal que la acción planteada está irreversiblemente inhabilitada, ha acordado su rechazo liminar o, en último caso, la suspensión definitiva de los correspondientes procesos.

La experiencia, en la legislación comparada, ha demostrado que un tribunal puede general una mejor calidad de sus fallos y consecuente producción jurisprudencial, cuando tiene la facultad de precalificar el conocimiento de aquellos casos que, por su relevancia, merezcan el esfuerzo intelectual de los jueces al momento de emitir decisiones respecto de aquellos. Se citan, como ejemplos, las potestades que tiene la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América (con el procedimiento de calificación y avocación de casos utilizado a la luz del *writ of certiorari*) y la facultad de revisión que constitucionalmente se le concede a la Corte de Constitucionalidad colombiana, como lo disponen los artículos 241, numeral 9 de la Constitución colombiana y en similar sentido, el artículo 20.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Español.

En ese orden de ideas, se sugiere instituir constitucionalmente la **facultad exclusiva de la Corte de Constitucionalidad para que pueda, en una labor previa de calificación de asuntos, decidir sobre la admisibilidad o inadmisibilidad** del trámite de los procesos constitucionales que no reúnan los presupuestos procesales que permitan un conocimiento propio del fondo de la acción, adicionándose en tal sentido un último párrafo al artículo 272 del Texto Constitucional.

- **NORMAS TRANSITORIAS Y DESARROLLO NORMATIVO POSTERIOR.** Finalmente, se hace necesario acotar que, dada la especial naturaleza de las reformas propuestas, deviene imperativo la inclusión de normas de tipo transitorio y el desarrollo normativo posterior que la implementación de las reformas propuestas requieren, en aras de lograr su eficacia. Tal es el caso, entre otros, de la concordancia de las

000070

reformas referidas con la necesidad de reformar la Ley Constitucional de Amparo, Exhibición Personal de de Constitucionalidad que regula detalladamente la materia, reforma que a la presente fecha, también ya se ha hecho un imperativo, especialmente por el abuso reiterado de la acción de amparo en materia judicial, como es de todos conocido y que desde hace un buen tiempo se encuentra asimismo en manos de este Organismo Legislativo.

Guatemala, octubre 2011.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Al abordar este tema, es preciso recordar que uno de los Acuerdos de Paz sobre el fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad democrática— giró en torno a la reforma y modernización de la administración de justicia, luego de estimarse que *"Una de las grandes debilidades estructurales del Estado guatemalteco reside en el sistema de administración de justicia, que es uno de los servicios públicos esenciales. En este sistema y, dentro de él, la marcha de los procesos judiciales, adolecen de fallas y deficiencias. La obsolescencia de los procedimientos legales, la lentitud de los trámites, la ausencia de sistemas modernos para la administración de los despachos y la falta de control sobre los funcionarios y empleados judiciales, propician corrupción e ineficiencia."*, especialmente para impedir que la misma *"... genere y encubra un sistema de impunidad y corrupción"*, añadiendo que *"El proceso judicial no es un simple procedimiento regulado por códigos y leyes ordinarias, sino el instrumento para realizar el derecho esencial de las personas a la justicia, el cual se concreta mediante la garantía de imparcialidad, objetividad, generalidad e igualdad ante la ley."*

Tomando en cuenta estas consideraciones, se puede concluir que la norma fundamental en materia de administración de justicia ha resultado insuficiente para satisfacer las necesidades de la sociedad y que es preciso introducir reformas a la normativa constitucional para mejorar el soporte normativo de sector judicial.

II. INDEPENDENCIA JUDICIAL Y GARANTÍAS DEL ORGANISMO JUDICIAL.

Al tema de la Independencia Judicial se refiere el artículo 203 constitucional, cuyo epígrafe dice: *"Independencia del Organismo Judicial y potestad de juzgar."* Se trata de la asunción de autonomía que debe ser propia de toda aquella persona que sea investida de la condición de juez, en cualquiera de sus grados, condición a la que, necesariamente, debe acompañar la de imparcialidad. La ausencia de uno u otro o, peor, la de ambas, desdibuja su figura hasta hacerla desaparecer como tal.

Cabe preguntar ¿cuál es o cuáles pueden ser los factores que pueden interferir buscando negar las condiciones aludidas? En la publicación de USAID *"Pautas para promover la independencia y la imparcialidad judicial"* que en marzo de 2002 dio a conocer la Oficina de Democracia y Gobernabilidad, en su Introducción afirma que ellas pueden provenir de *"el poder ejecutivo, la legislatura, los gobiernos locales, funcionarios gubernamentales o legisladores, partidos político, élites políticas y económicas, el ejército, paramilitares y fuerzas de inteligencia, redes criminales, la propia jerarquía judicial"* (página 6), a los que cabe agregar, entre otros, los derivados de dádivas encubiertas, tráfico de influencias, amenazas disfrazadas de partes en los procesos pendientes de solución o del crimen organizado o común.

De ahí que se afirme que *“... la independencia e imparcialidad que debe guardar un juez y, en general, todo el sistema judicial —como aprecia Rosario Serra Cristóbal, profesora universitaria de Valencia en su estudio Algunas reflexiones sobre la libertad ideológica del juez— reviste un carácter fundamental dentro de un Estado social y democrático de derecho. La independencia implica que el juez ha de encontrarse en una situación que le permita actuar sin intromisiones que provengan de los otros poderes del Estado, del propio poder judicial o de cualquier otra instancia. La imparcialidad significa, en concreto, que el juez ha de decidir de manera razonada el conflicto que se le somete, actuando exclusivamente sometido al mandato de la ley, desde el saber jurídico experimentado y la responsabilidad profesional.*

Evidentemente, independencia personal de juez e imparcialidad son dos conceptos que se confunden y aparecen entrelazados, siendo imposible el uno sin el otro. De hecho, si se pretende contar con jueces imparciales, es necesario dotarles de un estatuto que garantice su independencia, puesto que juega la presunción de que el juez no independiente tampoco será imparcial.”

No menos ilustrativo es el profesor Vladimiro Naranjo Mesa, quien en su obra *“Teoría Constitucional e Instituciones Políticas”*, novena edición, páginas 280 y 291, al detenerse en el tema que tratamos afirma:

“La independencia de los jueces y tribunales es, en un Estado de derecho, requisito esencial para una buena administración de justicia. Con ello se busca que estos funcionarios estén al abrigo de presiones indebidas por parte de los otros órganos del poder, tanto del ejecutivo como del legislativo. El hecho de que los miembros de la rama jurisdiccional requieran para el cabal cumplimiento de su elevada misión, del concurso material del gobierno — mediante la donación y sostenimiento de sus dependencias, pago de salarios y prestaciones, auxilio de la policía y organismos de seguridad, implementación del sistema carcelario y penitenciario, etc.— e incluso que, como ocurre en algunos Estados, sean nombrados por él, no significa en modo alguno que queden sometidos a su voluntad o puedan ser presionados en sus decisiones. Es cierto sí que al jefe del Estado se le confiere en muchas constituciones la importante atribución de velar porque se administre pronta y cumplida justicia en el desempeño de la actividad judicial, y solo en aquellos casos en que se cometan, por parte de jueces o magistrados, violaciones a la ley. La independencia del juez hace relación también con sus superiores jerárquicos; su autonomía para decidir debe ser absoluta respecto de estos. La superioridad jerárquica dentro de la rama jurisdiccional tiene vigencia únicamente en los aspectos administrativos o funcionales.

Pero más aún que el de la independencia, el principio de la imparcialidad es base insustituible y esencial de la administración de justicia. Es el principio que hace efectiva la garantía de que deben disfrutar todos los ciudadanos en una sociedad civilizada: la de la igualdad ante la ley. Es este ya un problema más que todo de índole moral y ética, que depende de la honestidad y de la honorabilidad de cada juez o magistrado. De ahí que el primer requisito para ser juez o magistrado no deba ser el de haber estudiado derecho y conocer esta ciencia, o haber trajinado los códigos, sino el de ser honesto. Si la honestidad es premisa fundamental para el desempeño de cualquier función pública, lo es en mayor grado aún para el ejercicio de la judicatura y de la magistratura. Nadie como el juez o el magistrado debe ser tan inmune al

soborno, a la presión, o al halago de cualquier especie. De no serlo así, toda la estructura del Estado de derecho queda falseada y amenazará ruina. La recta conciencia de un juez es la mejor garantía que tiene la sociedad para su defensa; solo con ella se logra que el inocente sea exonerado y el culpable castigado."

Los contenidos anteriores aparecen recogidos en el artículo 2.2 de la Declaración Universal sobre la independencia de la justicia, adoptada en la Primera Conferencia Mundial sobre la Independencia Judicial, realizada en Montreal el 10 de junio de 1983, que asentó: *"Los jueces individualmente deben ser libres. Su función consiste en decidir los asuntos desde su imparcialidad, y de acuerdo con su conocimiento de los hechos y del Derecho, sin ninguna restricción, influencia, inducción, presión, amenaza o interferencia, directa o indirecta, de cualquier instancia o por cualquier razón."*

Además, coincide con los estándares específicos de las Naciones Unidas, adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/46 de 13 de diciembre de 1985, En los cuales, se lee:

"Independencia de la judicatura

1. *La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole representarán y acatarán la independencia de la judicatura.*
2. *Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, aliciente, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directos o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo.*
3. *La judicatura será competente en todas las cuestiones de índole judicial y tendrá autoridad exclusiva para decidir si una cuestión que le haya sido sometida está dentro de la competencia que le haya atribuido la ley.*
4. *No se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial, ni se someterán a revisión las decisiones judiciales de los tribunales. Este principio se aplicará sin menoscabo de la vía de revisión judicial ni de la mitigación o conmutación de las penas impuestas por la judicatura efectuada por las autoridades administrativas de conformidad con lo dispuesto en la ley.*
5. *Toda persona tendrá derecho a ser juzgada por los tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente establecidos. No se crearán tribunales que no apliquen normas procesales debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda normalmente a los tribunales ordinarios.*
6. *El principio de la independencia de la judicatura autoriza y obliga a la judicatura a garantizar que el procedimiento judicial se desarrolle conforme a derecho, así como el respeto de los derechos de las partes.*

7. *Cada Estado Miembro proporcionará recursos adecuados para que la judicatura pueda desempeñar debidamente sus funciones.*"

En estudio más reciente, Alirio Abreu Burelli, Juez y Vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, publicado en el Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano con el título *"Independencia Judicial"*, afirma: *"La independencia, como se ha dicho, es fundamental para asegurar la imparcialidad de los tribunales y de los jueces. La Corte Europea, citada por la Corte Interamericana, ha señalado que la imparcialidad tiene aspectos tanto sustantivos como adjetivos, a saber: Primero: el tribunal debe carecer, de una manera subjetiva, de prejuicio personal. Segundo: también debe ser imparcial desde un punto de vista objetivo, es decir, debe ofrecer garantías suficientes para que no haya duda legítima al respecto. Bajo el análisis objetivo, debe determinar si, aparte del comportamiento personal de los jueces, hay hechos averiguables que podrán suscitar dudas respecto de su imparcialidad. En este sentido, hasta las apariencias podrán tener cierta importancia. Lo que está en juego es la confianza que deben inspirar los tribunales a los ciudadanos en una sociedad democrática, y sobre todo en las partes del caso."* (Tomo II, página 645).

Acerca de esto el Estatuto del Juez Iberoamericano, dispone que sólo un órgano perteneciente al poder judicial, puede ejercer acciones disciplinarias contra los jueces. Asimismo, el Estatuto contiene una serie de garantías relativas al debido proceso que deben respetarse en todo procedimiento de esta índole.

Resulta relevante el tema de la función administrativa del Organismo Judicial, en cuanto a que a éste compete lo relacionado con remociones y selección de personal, tarea delicada que debe ser atendida con especialidad por un órgano de la Corte Suprema de Justicia, siendo poco aconsejable dejar esa compleja labor a quienes deben atender, primordialmente, la función jurisdiccional.

Por ello es importante avanzar en el proceso de separación de funciones administrativas y jurisdiccionales para que sea un cuerpo especializado del más alto nivel el que se ocupe de las primeras, y otras cámaras se encarguen de las segundas. De esa cuenta se propone la creación de una Cámara Administrativa que tenga bajo su responsabilidad las funciones administrativas que van, desde las contrataciones de personal, servicios, compras, administración de edificios, etc., hasta la selección y nombramiento de jueces y magistrados de apelaciones.

III. CARRERA JUDICIAL Y CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL.

En la reforma propuesta al artículo 205 se establece como garantía del Organismo Judicial, la Carrera Judicial. El artículo 208 establece los ejes de la carrera judicial ampliando el período para jueces y magistrados de cinco a diez años. También fija los límites de la carrera judicial que parte de la judicatura de paz hasta la magistratura de apelaciones en sentido estricto, aunque más adelante se propone que también ocho de los trece magistrados de la Corte Suprema de Justicia sean de carrera (art. 215). Lo referente a la carrera judicial se debe desarrollar en una ley específica, como ya lo ordena la constitución vigente.

La ley ordenada fue emitida por el Congreso de la República el 27 de octubre de 1999, por medio del Decreto número 41-99, bajo la consideración de que: *"una de las grandes debilidades estructurales del Estado guatemalteco reside en el sistema de administración de justicia, que es uno de los servicios públicos esenciales; que su reforma y modernización deben dirigirse a impedir que éste genere y encubra un sistema de impunidad y corrupción y, al mismo tiempo, se revierta la ineficacia, se garantice el libre acceso a la justicia, la imparcialidad en su aplicación, la independencia judicial, la autoridad ética, la probidad del sistema en su conjunto y su modernización."* No cabe duda que introducir reformas al texto fundamental implicará proponer al Congreso la adecuación de la normativa ordinaria.

Con el objeto de seguir el orden de temas fijado por el legislador constituyente, emprendemos el examen del artículo 208 de nuestro texto constitucional, que destaca particularmente el periodo de funciones de magistrados y jueces. El periodo se fija en cinco años, señalando que los magistrados pueden ser reelectos y nombrados nuevamente los segundos.

La experiencia ha mostrado que ese tiempo se aprecia corto, de modo especial para magistrados, ya que siendo estos objeto de: a) Declarar su interés por ocupar una magistratura mediante el llenado de formularios y satisfacción de requisitos consiguientes que presentan a una comisión de postulación; b) De someterse a un procedimiento, el diseñado en la Ley de Comisiones de Postulación, que ha sido objeto de no pocos tropiezos, bien por el incumplimiento al límite de lo reglado tanto en los candidatos como en los integrantes de las comisiones, además de los señalamientos públicos que, con razón o sin ella, puede hacer toda persona o entidad; c) Las selecciones primeras y posteriores hechas por las comisiones, no pocas veces impugnadas por acciones de amparo, dado la inconformidad de los pretensores a la o las calificaciones que los excluyen para continuar participando; d) La detención en la solución de litigios que penden ante magistrados por el tiempo —incluida parte de tiempo laboral— que muchos de ellos emplean para su equivalente pretensión de ser reelegidos; y, e) Los intereses políticos que respecto, tanto de una primera elección, como de reelección, utilizan indebidamente algunos legisladores, sea por ser llamados o por propia iniciativa, factores todos que vienen a conformar un decaimiento jurisdiccional cada cinco años.

Prolongar el periodo a magistrados y jueces contribuye a que el país asegure una marcha regular de la función jurisdiccional por cerca de un decenio y, por otra, que la selección para un periodo mayor obre en el cuerpo elector para que, apoyado por una manera distinta de escogencia, de pie a un cuadro de juzgadores consagrados a la delicada función de impartir sana y honestamente la justicia, condición fundamental para derrotar la violencia y todo lo que ella conlleva, generando la convicción social de hallar en los juzgadores el estamento que propicie la paz civilizada.

Se estima que, por la tradición y circunstancias imperantes, ante la menor posibilidad de que nuestro legislador, constituyente de segundo grado, pueda considerar ya apropiado el ejercicio vitalicio de la judicatura, en general, extender el periodo de su función a diez años, como se ha sugerido en diversas relatorias sobre la situación de la justicia en Guatemala, puede y debe coadyuvar en gran medida a generar un ambiente propicio para que la función jurisdiccional que en ellos descansa, supere todos los inconvenientes derivados

de la cortedad del periodo actual, amén de ser diez años un tiempo que constituya un aliciente a abogados competentes en busca de iniciarse en la noble tarea que pretende ser la carrera judicial. El periodo de magistrados de apelaciones y jueces se fija en la propuesta de artículo 208 como se expresa *infra*.

El artículo 209 constitucional, trata del Consejo de la Carrera Judicial, integrado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, que lo presidirá; un miembro titular y un suplente electos por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia; un miembro titular y un suplente electos por la Asamblea General de Magistrados de la Corte de Apelaciones y los demás tribunales colegiados de la misma categoría; un miembro titular y un suplente electos por la Asamblea General de Jueces de Primera Instancia; un miembro titular y un suplente electos por la Asamblea General de Jueces de Paz; un titular y un suplente designados por la Universidad de San Carlos de Guatemala; y, un titular y un suplente designados por los decanos de las facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de las Universidades privadas del país. Asimismo, sienta las bases para los procesos de ingreso, promociones y ascensos, como los traslados y otras figuras administrativas aplicables a jueces y magistrados.

La carrera judicial resulta ser el eje principal en el cual gira la independencia de los jueces, pues garantiza estabilidad y evita la injerencia de intereses distintos a los de la jurisdicción. En la modificación propuesta, pretende garantizarse además, la idoneidad e independencia de jueces y magistrados. Esto es algo que requiere rango constitucional, y para el efecto ha de crearse un Consejo de la Carrera Judicial imparcial, a cargo de aplicar la carrera, de manera que regule los nombramientos, promociones, ascensos, perfeccionamiento, traslados, retiro, etc. de jueces y magistrados.

IV. PRESUPUESTO DEL ORGANISMO JUDICIAL.

El Estatuto del Juez Iberoamericano expresa que *"Vale la pena señalar que las normas internacionales permiten que cada Estado determine la mejor manera de garantizar que el poder judicial reciba los fondos adecuados. Debido a que un adecuado financiamiento constituye un elemento esencial de la independencia del poder judicial este principio debe estar incluido en el sistema jurídico de cada país, preferentemente en la Constitución"* Y concluye: *"El poder judicial debe estar debidamente financiado para desempeñar sus funciones. Los Estados tienen la obligación de garantizar este requisito, preferentemente mediante la legislación. La participación judicial en la delineación del presupuesto constituye una garantía importante contra el financiamiento insuficiente. A pesar de que el poder judicial goza de autonomía financiera, debe responder ante las otras ramas del poder por la mala utilización de los fondos."*

En Guatemala, el tema presupuestario del Organismo Judicial quedó determinado en el artículo 213, cuya redacción original se lee; "Artículo 213. Presupuesto del Organismo Judicial. Es atribución de la Corte Suprema de Justicia formular el presupuesto del Ramo; para el efecto, se le asigna una cantidad no menor del dos por ciento del Presupuesto de Ingresos Ordinarios del Estado, que deberá entregarse a la Tesorería del Organismo Judicial cada mes en forma proporcional y anticipada por el órgano correspondiente.

Son fondos privativos del Organismo Judicial los derivados de la administración de justicia y su inversión corresponde a la Corte Suprema de Justicia. El Organismo Judicial deberá publicar anualmente su presupuesto programático e informar al Congreso de la República cada cuatro meses acerca de los alcances y de la ejecución analítica del mismo.”

Desde este punto de vista no deben de recordarse las preocupaciones que acerca del presupuesto finalmente reservado en el texto constitucional, dejaron adelantado los constituyentes nombrados, especialmente la apreciación en el desequilibrio que guarda el del Organismo Judicial respecto del porcentaje asignado al tema de los deportes, de modo que en la necesaria reforma que en futuro cercano debiera adoptarse, el constituyente de segundo grado halle como fórmula necesaria, asignar más recursos al Organismo Judicial. Es por ello que la Corte Suprema de Justicia estima que el artículo 213 bajo análisis debe modificarse.

V. INTEGRACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

Basados en las consideraciones de independencia judicial y de la necesidad de separación de las funciones jurisdiccionales de las funciones administrativas de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se propone la creación de una cámara administrativa que fungirá como órgano superior de administración del Organismo Judicial para que los magistrados de las cámaras jurisdiccionales no deban invertir su tiempo y esfuerzo en estos aspectos. Esto dará fortaleza a las cámaras de Amparo, Civil y Penal en su delicada responsabilidad de fijar la jurisprudencia.

Asimismo, se busca resolver un problema recurrente en la Constitución Política de la República de Guatemala vigente, que consiste en las elecciones anuales del Presidente de la Corte Suprema de Justicia. La propuesta es que la presidencia tenga duración de cinco años, lo que dará sustento e institucionalidad a las políticas administrativas que defina la máxima autoridad en esa materia.

Asimismo, se propone que la renovación de la Corte Suprema de Justicia se haga a mitad de período. Así, de trece magistrados, todos serán electos o designados para diez años, pero cada cinco años, seis o siete de ellos serán renovados. Para el efecto se propone un artículo transitorio que permita que a la primera elección que se dará en 2014 se elija o designe 7 magistrados para el período de diez años, mientras que seis de ellos, por esta única vez, durarán solo cinco años en sus funciones. Para ello, se propone la reforma de los artículos 214 y 215.

VI. MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES.

Los magistrados de la Corte de Apelaciones, por formar parte de la carrera judicial, se propone sean nombrados por la Corte Suprema de Justicia, de una nómina de candidatos equivalente al doble de magistrados a nombrar. La nómina deberá ser propuesta por el Consejo de la Carrera Judicial. Para ser congruente con las consideraciones y propuestas anteriores, su período durará diez años.

VII. DE LAS ADICIONES A LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES.

Finalmente, en la adición del artículo 28 del TÍTULO VIII, CAPÍTULO ÚNICO, Disposiciones transitorias y finales, se propone la inclusión del principio de igualdad de género en la condición de cargo, categoría, profesión u oficio, que estén expresados en masculino en el texto constitucional u otras leyes. En la adición del artículo 29 del TÍTULO VIII, CAPÍTULO ÚNICO, Disposiciones transitorias y finales, se considera que para la aplicación de las reformas propuestas sobre la conformación de la Corte Suprema de Justicia, una vez aprobadas, se requieren medidas que permitan la transición ordenada al nuevo sistema; para ello se plantea la renovación parcial de la Corte, pues debe definirse quiénes serán los magistrados electos para diez años y quiénes para cinco, en la primera elección después de que estén vigentes las reformas.

VIII. CONSIDERACIONES FINALES.

Es pertinente anotar que un proceso de modernización de nuestra justicia debe intentarse precisamente de manera progresiva como proceso, y las propuestas deben responder a nuestras tradiciones jurídicas y a la necesidad de justicia que la población guatemalteca manifiesta, de lo que se ha escrito bastante en informes, diagnósticos y análisis del sistema guatemalteco. Las necesidades pueden ir más lejos de lo que se propone, pero pretender abarcar todo podría acarrear el riesgo de hacerlas inviables porque debe buscarse el equilibrio entre lo que se quiere con lo que se puede, y el modelo de reformas constitucionales requiere no solo la voluntad de quien las propone sino de quien las aprueba y quien las ratifica en consulta popular.

El proyecto es el siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA**CONSIDERANDO**

Que la Constitución Política de la República de Guatemala aprobada el 31 de mayo de 1985, vigente desde el 14 de enero de 1986 y reformada en 1993, es el texto que diseña el modelo del Estado de Guatemala y, dentro del mismo, el modelo de administración de justicia, al establecer las normas fundamentales y básicas para el ejercicio de la jurisdicción y la administración del Poder Judicial.

CONSIDERANDO

Que la práctica judicial durante los años de vigencia de la Constitución Política de la República de Guatemala ha demostrado que se requiere variar el modelo para que responda a las exigencias de justicia de la ciudadanía y el fortalecimiento de la independencia de jueces y magistrados.

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de la República de Guatemala faculta al Congreso de la República, como Constituyente derivado, competente para aprobar reformas constitucionales que deben ser sujetas a ratificación de la ciudadanía mediante consulta popular.

POR TANTO

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 280 de la Constitución Política de la República de Guatemala,

APRUEBA**LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES SIGUIENTES**

Artículo 1. Se reforma el artículo 205, el cual queda así:

“Art. 205. Garantías del Organismo Judicial. Se instituyen como garantías del Organismo Judicial, las siguientes:

- a) La independencia funcional
- b) La independencia económica
- c) La carrera judicial; y
- d) La selección del personal.”

Artículo 2. Se reforma el artículo 208, el cual queda así:

“Artículo 208. Carrera Judicial. La Ley de la Carrera Judicial garantizará la estabilidad, idoneidad e independencia de los jueces y magistrados.

La carrera judicial abarca desde la judicatura de paz hasta la magistratura de la Corte de Apelaciones y de otros tribunales de igual categoría.

Los magistrados de la Corte de Apelaciones y de otros tribunales de igual categoría y los jueces de primera instancia y de paz, durarán en sus funciones diez años, pudiendo ser nombrados nuevamente de acuerdo a la evaluación de su desempeño, conforme lo determine la Ley de la Carrera Judicial.

Durante ese período no podrán ser removidos ni suspendidos, sino en los casos y con las formalidades que disponga la ley.”

Artículo 3. Se reforma el artículo 209, el cual queda así:

“Artículo 209. Del Consejo de Carrera Judicial. El Consejo de la Carrera Judicial estará integrado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, que lo presidirá; un miembro titular y un suplente electos por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia; un miembro titular y un suplente electos por la Asamblea General de Magistrados de la Corte de Apelaciones y los demás tribunales colegiados de la misma categoría; un miembro titular y un suplente electos por la Asamblea General de Jueces de Primera Instancia; un miembro titular y un suplente electos por la Asamblea General de Jueces de Paz; un titular y un suplente nombrados por la Universidad de San Carlos de Guatemala; y, un titular y un suplente designados por los decanos de las facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de las Universidades privadas del país.

Los procesos de ingreso, nombramientos, promociones y ascensos, de formación profesional y perfeccionamiento de la función y de traslados, permutas, retiro obligatorio y jubilaciones de magistrados y jueces serán competencia del Consejo de la Carrera Judicial, de conformidad con la ley de la materia.”

Artículo 4. Se reforma el primer párrafo del artículo 213, el cual queda así:

“Artículo 213. Presupuesto del Organismo Judicial. Es atribución de la Corte Suprema de Justicia formular el presupuesto del ramo; para el efecto, se le asigna una cantidad no menor del seis por ciento del presupuesto de ingresos ordinarios del Estado, que deberá entregarse a la Tesorería del Organismo Judicial cada mes en forma proporcional y anticipada por el órgano correspondiente.

Son fondos privativos del Organismo Judicial los derivados de la administración de justicia y su inversión corresponde a la autoridad administrativa superior del Organismo Judicial. El Organismo Judicial deberá publicar anualmente su presupuesto programático e informará al Congreso de la República cada cuatro meses acerca de los alcances y de la ejecución analítica del mismo.”

Artículo 5. Se reforma el artículo 214, el cual queda así:

“Artículo 214. Integración de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia se integra por trece magistrados, incluyendo a su Presidente, y se organizará en las cámaras que la misma determine. Cada cámara tendrá su presidente.

La función administrativa superior del Organismo Judicial corresponde con exclusividad a la Cámara Administrativa presidida por el Presidente del Organismo Judicial.

El Presidente del Organismo Judicial lo es también de la Corte Suprema de Justicia cuya autoridad se extiende a los tribunales de toda la República.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia elegirán entre sus miembros, con el voto favorable de las dos terceras partes, al Presidente de la misma, quien fungirá como tal por un período de cinco años, pudiendo ser reelecto. En

caso de falta temporal del Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia o cuando conforme a la ley no pueda actuar o conocer en determinados casos, lo sustituirán los demás magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el orden de su designación.”

Artículo 6. Se reforma el artículo 215, el cual queda así:

“Artículo 215. Elección de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos para un período de diez años, renovándose cada cinco años, seis o siete de ellos, según corresponda, pudiendo ser reelectos de la manera siguiente:

- a) Ocho magistrados seleccionados de entre los miembros de la carrera judicial por el Consejo de la Carrera Judicial; y,
- b) Cinco magistrados electos por el Congreso de la República de una nómina de diez candidatos, propuestos por el Consejo de la Carrera Judicial entre profesionales de reconocida honorabilidad, capacidad e idoneidad y que reúnan los requisitos constitucionales y legales para el cargo.

En la elección de candidatos a magistrados de Corte Suprema de Justicia, se requerirá el voto favorable de dos tercios del total de miembros del Consejo de la Carrera Judicial.

Los magistrados a que se refiere el inciso b) serán electos con el voto de las dos terceras partes o más del total de diputados que integran el Congreso de la República.”

Artículo 7. Se reforma el artículo 216, el cual queda así:

“Artículo 216. Requisitos para ser magistrado o magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Para ser electo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, se requiere, además de los requisitos previstos en el artículo 207 de esta Constitución, ser mayor de cuarenta y cinco años y haber desempeñado un período completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o de los tribunales colegiados que tengan la misma calidad, o haber ejercido la profesión de abogado por más de quince años.”

Artículo 8. Se reforma el artículo 217, el cual queda así:

“Artículo 217. Magistrados o magistradas de la Corte de Apelaciones. Para ser magistrado de la Corte de Apelaciones, de los tribunales colegiados y de otros que se crearen con la misma categoría, se requiere, además de los requisitos señalados en el artículo 207, ser mayor de treinta y cinco años, haber ejercido la judicatura de primera instancia o haber ejercido por más de diez años la profesión de abogado y ser nombrado por la Corte Suprema de Justicia de una lista del doble de candidatos propuesta por el Consejo de la Carrera Judicial, de acuerdo al procedimiento que regule la Ley de la Carrera Judicial.”

Artículo 9. Se adiciona el artículo 28, en el TÍTULO VIII, CAPÍTULO ÚNICO, Disposiciones transitorias y finales, el cual queda así:

“Artículo 28. Para integrar la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República y el Consejo de la Carrera Judicial, por una sola vez, elegirán a los magistrados, en la forma siguiente:

a) Seis que durarán cinco años en sus cargos, por el período comprendido del 13 de octubre de 2014 al 12 de octubre de 2019, dos de ellos serán de carrera judicial electos por el Consejo de la Carrera Judicial; y, cuatro electos por el Congreso de la República.

b) Siete que durarán en sus cargos diez años, por el período comprendido del 13 de octubre de 2014 al 12 de octubre de 2024, uno electo por el Congreso de la República y seis de carrera judicial electos por el Consejo de la Carrera Judicial. En lo sucesivo se estará a lo dispuesto por el artículo 215.

Para efectos de lo establecido en el artículo 217 de esta Constitución, dos terceras partes deben provenir de la carrera judicial.

Los jueces y magistrados que se encuentren en funciones al momento de la entrada en vigencia de las presentes reformas constitucionales, continuarán en sus cargos hasta la finalización del período para el cual fueron electos o nombrados. El período de diez años establecido en las presentes reformas, aplicará para las nuevas elecciones o nombramientos que el Consejo de la Carrera Judicial y el Congreso de la República oportunamente dispongan.”

Para efectos de lo establecido en el artículo 217 de esta Constitución, dos terceras partes deben provenir de la carrera judicial.

Los jueces y magistrados que se encuentren en funciones al momento de la entrada en vigencia de las presentes reformas constitucionales, continuarán en sus cargos hasta la finalización del período para el cual fueron electos o nombrados.

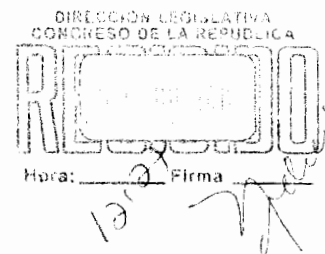
El período de diez años establecido en las presentes reformas, aplicará para las nuevas elecciones o nombramientos que el Consejo de la Carrera Judicial y el Congreso de la República oportunamente dispongan.”

Artículo 10. Vigencia. Las presentes reformas constitucionales serán sometidas a la ratificación de la ciudadanía mediante consulta popular que deberá ser convocada por el Tribunal Supremo Electoral y entrarán en vigencia sesenta días después de que ese Órgano anuncie el resultado que las ratifique.



*Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

000083



VOTO RAZONADO
DICTAMEN INICIATIVA 4387

En mi calidad de Diputado al Congreso de la República y miembro de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en amparo de lo establecido en el artículo 41 del Decreto 63-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Orgánica del Organismo Legislativo, procedo a emitir mi voto razonado, y procedo a razonar el voto en dos aspectos puntuales, que detallo a continuación:

Inclusión de Pueblos Indígenas:

Si bien se ha destacado ya en numerosos estudios al igual que en el presente dictamen la importancia de las reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia, y el beneficio que significaría para el sistema de justicia en su conjunto, en el sentido de garantizar oralidad, transparencia, celeridad, inmediación, etc. en procesos por de más sensibles frente a los Derechos Humanos de quien se enfrenta en estos, no es posible afirmar con la misma contundencia que dichas reformas significarían un avance en las demandas de los Pueblos Indígenas en la materia.

La relación, entonces, de las reformas constitucionales en la materia con los Derechos de los Pueblos indígenas es relevante si consideramos, por un lado, la importancia de su reconocimiento e inclusión del pluralismo jurídico en el texto constitucional como factor fundamental en una sociedad multiétnica, multilingüe y pluricultural como la guatemalteca. Dar cabida a los Derechos de los Pueblos indígenas en las transformaciones de la justicia, vincular los procesos de democratización de la justicia a una mayor inclusión de los Pueblos indígenas en la vida democrática, relacionar la consolidación del Estado de Derecho a una mayor participación de los Pueblos originarios es parte de la construcción de un nuevo Estado.

En estos últimos años, muchos analistas de la realidad jurídica latinoamericana están utilizando en sus investigaciones empíricas y en sus teorizaciones, este argumento del pluralismo jurídico. En países como México, Brasil ó Perú el estado



Congreso de la República
Guatemala, C. A.

de situaciones en los cuales determinados grupos asumen sus propios sistemas de regulación, ha hecho indagar a distintos investigadores sobre la existencia de diversos órdenes jurídicos que se confrontan, o suplen el orden estatal, o coexisten con él, concibiendo a estas situaciones como sistemas jurídicos paralelos.

En Guatemala, coexisten por lo menos dos sistemas jurídicos, el llamado Derecho formal u ordinario y el denominado Sistema Jurídico Propio de los Pueblos Indígenas. Históricamente los Pueblos Indígenas se han desarrollado por sus propios sistemas jurídico y político, pero han sido invisibilizado, en virtud de la imposición cultural occidental, de esa cuenta los pueblos Indígenas desarrollan lo que denominamos una fuerte Resistencia Cultural, por medio del cual han sobrevivido sus sistemas propios con su propia lógica y su forma de ver el mundo dicho en otros términos desde su propia visión filosófica.

A partir del gran debate de la construcción de los Estados Nacionales homogéneos frente a la necesidad de la construcción de los Estados plurales, en donde existan mecanismos jurídicos y políticos que garanticen el respeto a las diferencias y que el aparato estatal responda a la diversidad cultural, ciudadana, o étnica, se impulsan cambios importantes en el ámbito jurídico en el mundo. La protección de derechos específicos, y el avance en la comprensión del derecho como ciencia universal, nos conduce a reconocer que la vieja idea de a un Estado corresponde un Derecho, fue superado. Hoy se hace imprescindible poner un orden en lo que ha evolucionado el derecho y la realidad sociopolítica del país en base a la construcción de la pluralidad, específicamente en base a la impostergable y necesaria forma de respetar los derechos de Pueblos Indígenas como parte integral del Estado Guatemalteco.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, mi voto es razonado en este punto debido a que en el contenido del presente dictamen no se refleja esa inclusión y pluralismo tan necesario en nuestro ordenamiento constitucional.



*Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

Plazo De Elección De Jueces Y Magistrados:

De acuerdo con lo establecido en el presente dictamen en lo referente al tiempo de elección de jueces y magistrados, que en su parte conducente establece lo siguiente:

"En cuanto al plazo del período de los jueces y magistrados al momento de ser electos que se propone sea mayor, pasando de cinco a diez años, esta Comisión considera que es prudente y procedente dicha ampliación, lo que permitirá alejar las elecciones, designaciones y nombramientos del constante procedimiento de renovación practicado en la actualidad, pero hace notar la Comisión al Pleno del Congreso de la Republica, la necesidad de discutir las propuestas alternas hechas en las audiencias públicas realizadas sobre este tema, y que están referidas a plazos más largos en esos nombramientos e incluso aprobar nombramientos de plazo indefinido o vitalicio."

Considero que Guatemala primero debe garantizar la participación de mujeres y pueblos indígenas en igualdad de condiciones antes de pensar en una reforma constitucional de esta magnitud, ya que es de vital importancia la representatividad de los sectores tradicionalmente marginados en la administración de justicia, y así poder garantizar el principio de igualdad establecido en el propio texto constitucional, mismo que ha sido desarrollado por la propia Corte de Constitucionalidad en la Gaceta No. 24, expediente No. 141-92, página No. 14, sentencia: 16-06-92, la que estipula, lo siguiente:

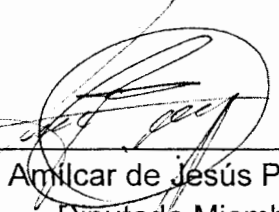
"...el principio de igualdad, plasmado en el artículo 4o. de la Constitución Política de la República impone que situaciones iguales sean tratadas normativamente de la misma forma; pero para que el mismo rebase un significado puramente formal y sea realmente efectivo, se impone también que situaciones distintas sean tratadas desigualmente, conforme sus diferencias. Esta Corte ha expresado en anteriores casos que este principio de igualdad hace una referencia a la universalidad de la ley, pero no prohíbe, ni se opone a dicho principio, el hecho que el legislador contemple la necesidad o conveniencia de clasificar y diferenciar situaciones distintas y darles un tratamiento diverso, siempre que tal diferencia tenga una



000086

*Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

*ijustificación razonable de acuerdo al sistema de valores que la Constitución
acoge..."*


Amílcar de Jesús Pop Ac
Diputado Miembro

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales
Congreso de la República de Guatemala

